



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Expediente: **CI/ISEM/OF/020/2017**.

Toluca, México, veintidós de enero de dos mil dieciocho.

Visto el expediente **CI/ISEM/OF/020/2017**, para resolver sobre la responsabilidad administrativa atribuida a las **CC. Juana Lourdes Barrera Morales y Ofelia Margarita Hernández Peña**, con Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED] y [REDACTED] por actos cometidos en su calidad de servidoras públicas adscritas al Instituto de Salud del Estado de México, y;

RESULTANDO

1. Mediante oficio 217B11300/028/2017 la Subdirectora de Auditoría a Salud y Regulación Sanitaria, remitió a la Subdirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial ambas de ésta Contraloría Interna, copias simples de título y cédula profesional de las **CC. Juana Lourdes Barrera Morales y Ofelia Margarita Hernández Peña**, adscritas al Centro de Salud Coacalco de la Jurisdicción Sanitaria Ecatepec, toda vez que de la inspección a servicios personales 041-0188-2017 denominada al perfil académico del personal adscrito a la Jurisdicción Sanitaria Ecatepec del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del uno al diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, se detectó que los datos de las cédulas profesionales no corresponden a los asentados en el Registro Nacional de Profesionistas.
2. Mediante acuerdo de cinco de abril de dos mil diecisiete, visible a foja 1 de los autos, esta autoridad administrativa radicó el expediente **CI/ISEM/OF/020/2017**, ordenando la apertura de un periodo de información previa, con el objeto de conocer las circunstancias del caso concreto y estar en posibilidad de determinar, en su caso, el inicio del procedimiento administrativo correspondiente, en contra del servidor público que resultara responsable.
3. El diez de octubre de dos mil diecisiete, se determinó la instauración del presente procedimiento administrativo disciplinario en contra de las **CC. Juana Lourdes Barrera Morales y Ofelia Margarita Hernández Peña** en su calidad de servidoras públicas adscritas al Instituto de Salud del Estado de México, y una vez que se tuvieron por desahogadas las garantías de audiencias, las pruebas ofrecidas y los alegatos vertidos por las implicadas, se ordenó turnar el expediente a resolución, misma que ahora se pronuncia conforme a los siguientes:

CONSIDERANDOS

1. Esta Unidad de Contraloría Interna del Instituto de Salud del Estado de México, es competente para conocer, tramitar y resolver el presente asunto por la naturaleza de los hechos mencionados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 109 fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 78 y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, anterior a las reformas emitidas mediante Decreto 202, publicado en la Gaceta del Gobierno el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, conforme a lo establecido en los artículos quinto y octavo transitorios; 3, 15, 19 fracción XIV y 38 bis fracción XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 2, 3 fracciones IV y VIII, 41, 43, 52 primer párrafo y 59 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, anterior a las reformas emitidas mediante Decreto 207, publicado en la Gaceta del Gobierno el treinta de mayo de dos mil diecisiete, de conformidad con el artículo noveno transitorio; 1.7 y 1.8 del Código Administrativo del Estado de México; 129 fracción I del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 28 fracciones V y XXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, publicado en la Gaceta del Gobierno el doce de febrero de dos mil ocho, anterior al Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, publicado en la Gaceta del Gobierno el siete de septiembre de dos mil diecisiete, de conformidad con el artículo séptimo transitorio; 43 fracciones VIII y XX del Reglamento Interno del Instituto de Salud



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Expediente: CI/ISEM/OF/020/2017.

del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno el doce de agosto del dos mil once; función nueve del numeral 217B11000 relativo a la Unidad de Contraloría Interna del Manual General de Organización del Instituto de Salud del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno el dieciocho de diciembre de dos mil trece.

II. Las presuntas responsabilidades administrativas atribuidas a las **CC. Juana Lourdes Barrera Morales y Ofelia Margarita Hernández Peña**, consisten en:

- a. A la **C. Juana Lourdes Barrera Morales**, se atribuye que en su calidad de servidor público adscrita al Instituto de Salud del Estado de México, exhibió copia del Título y cédula profesional con folio [REDACTED] que la ostentan como Enfermera General Obstetra, supuestamente expedidos por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, respectivamente, aun cuando dichos documentos no fueron expedidos a su favor, como se advierte del oficio DGAE/DCyCD/1159/2017 visible a foja 60 de los autos, suscrito por el Director General de Administración Escolar de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que informó: "...En atención a su oficio No. 217B11000/02119/2017... mediante el cual solicita la validación de dos títulos de Enfermera General Obstetra emitidos supuestamente por la UNAM a las CC... **JUANA LOURDES BARRERA MORALES**... realizada una búsqueda en el Archivo General y en el Sistema Integral de Administración Escolar **no se localizaron antecedentes de las referidas personas como alumnas de esta Universidad** o de alguna Institución incorporada a ésta..."; y DGP/DJ/1690/2017, visible a foja 45 de los autos, suscrito por la Directora de Autorización y Registro Profesional de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en la que señaló: "...En atención a su oficio número 217B11203/353/2017... mediante el cual solicita se informe si esta Dirección de Profesiones cuenta con registro a favor de los C.C. **JUANA LOURDES BARRERA MORALES**, bajo el número de cédula profesional [REDACTED] misma que supuestamente le acredita para ejercer como Enfermera General Obstetra... después de haber realizado una búsqueda en los archivos de esta Unidad Administrativa, **NO SE LOCALIZÓ registro profesional a favor de los C.C. JUANA LOURDES BARRERA MORALES**, bajo el número de cédula profesional [REDACTED] misma que supuestamente le acredita para ejercer como Enfermera General Obstetra... Asimismo se comenta que los números de cédula profesional [REDACTED] corresponden a otras personas... (...) ...las copias imples que anexa de las cédula profesional números [REDACTED] mismas que acreditan para ejercer como Enfermera General Obstetra, a favor de los C.C. **JUANA LOURDES BARRERA MORALES**... supuestamente expedidas por esta Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, la misma **se desconoce** y por lo tanto, se presume **apócrifa**..."; es decir, en la Universidad Nacional Autónoma de México, no existen antecedentes de que la **C. Juana Lourdes Barrera Morales** haya sido alumna de la citada Universidad o bien de alguna institución incorporada; asimismo en el Registro Nacional de Profesionistas no existe antecedente profesional de la servidor público como Enfermera General Obstetra y el número de la cédula profesional [REDACTED] exhibido corresponde a otra persona, por lo que el título que exhibió no cuenta con sustento académico y la cédula que presentó corresponde a otra persona, no obstante, fueron exhibidos por la servidor público, con el firme propósito de que se agregaran a su expediente personal; faltando con su conducta a los principios de legalidad, honradez y lealtad, que rigen la prestación del servicio público, ya que abusando de la buena fe del Instituto de Salud del Estado de México, se ostenta con una profesión de Enfermera General Obstetra sin que la documentación exhibida por la implicada tenga sustento académico.

Incumpliendo con su conducta los principios de legalidad, lealtad y honradez que rigen la prestación del servicio público, y que en su calidad de servidor público le establece el artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

- b. A la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña** se atribuye que en su calidad de servidor público adscrita al Instituto de Salud del Estado de México, exhibió copia del Título y cédula profesional con folio [REDACTED] que la ostentan como Enfermera General Obstetra, supuestamente expedidos por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, respectivamente, aun cuando dichos



documentos no fueron expedidos a su favor, como se advierte del oficio DGAE/DCyCD/1159/2017 visible a foja 60 de los autos, suscrito por el Director General de Administración Escolar de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que informó: "...En atención a su oficio No. 217B11000/02119/2017... mediante el cual solicita la validación de dos títulos de Enfermera General Obstetra emitidos supuestamente por la UNAM a las CC. **OFELIA MARGARITA HERNÁNDEZ PEÑA**... realizada una búsqueda en el Archivo General y en el Sistema Integral de Administración Escolar **no se localizaron antecedentes de las referidas personas como alumnas de esta Universidad** o de alguna Institución incorporada a ésta..."; y DGP/DJ/1690/2017, visible a foja 45 de los autos, suscrito por la Directora de Autorización y Registro Profesional de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en la que señaló: "...En atención a su oficio número 217B11203/353/2017... mediante el cual solicita se informe si esta Dirección de Profesiones cuenta con registro a favor de los C.C... **OFELIA MARGARITA HERNÁNDEZ PEÑA**, bajo el número de cédula profesional [REDACTED] misma que supuestamente le acredita para ejercer como Enfermera General Obstetra... después de haber realizado una búsqueda en los archivos de esta Unidad Administrativa, **NO SE LOCALIZÓ registro profesional a favor de los C.C... OFELIA MARGARITA HERNÁNDEZ PEÑA**, bajo el número de cédula profesional [REDACTED] misma que supuestamente le acredita para ejercer como Enfermera General Obstetra. Asimismo se comenta que los números de cédula profesional... [REDACTED] corresponden a otras personas... (...) las copias imples que anexa de las cédula profesional números... [REDACTED] mismas que acreditan para ejercer como Enfermera General Obstetra, a favor de los C.C... **OFELIA MARGARITA HERNÁNDEZ PEÑA**, supuestamente expedidas por esta Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, la misma **se desconoce** y por lo tanto, se presume **apócrifa**..."; es decir, en la Universidad Nacional Autónoma de México, no existen antecedentes de que la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña** haya sido alumna de la citada Universidad o bien de alguna institución incorporada; asimismo, en el Registro Nacional de Profesionistas no existe antecedente profesional de la servidor público como Enfermera General Obstetra y el número de la cédula profesional [REDACTED] exhibido corresponde a otra persona, por lo que el título que exhibió no cuenta con sustento académico y la cédula que presentó corresponde a otra persona, no obstante, fueron exhibidos por la servidor público, con el firme propósito de que se agregaran a su expediente personal; faltando con su conducta a los principios de legalidad, honradez y lealtad, que rigen la prestación del servicio público, ya que abusando de la buena fe del Instituto de Salud del Estado de México, se ostenta con una profesión de Enfermera General Obstetra sin que la documentación exhibida por la implicada tenga sustento académico.

Incumpliendo con su conducta los principios de legalidad, lealtad y honradez que rigen la prestación del servicio público, y que en su calidad de servidor público le establece el artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

III. Mediante oficios citatorios 217B11000/05419/2017 y 217B11000/05420/2017 de diez de octubre de dos mil diecisiete, visibles a fojas 70 a 72 y 75 a 77 de los autos, respectivamente, notificados legalmente a las **CC. Juana Lourdes Barrera Morales y Ofelia Margarita Hernández Peña**, como se acredita con las razones de notificación visibles a fojas 74 y 79 de los autos, respectivamente, se requirió su comparecencia a efecto de desahogar su garantía de audiencia, habiendo comparecido personalmente la C. Juana Lourdes Barrera Morales y por escrito la C. Ofelia Margarita Hernández Peña el siete de noviembre de dos mil diecisiete, instrumentándose para efecto de constancia las actas administrativas agregadas a fojas 82 a 83 y 91 del expediente, manifestando lo que a su derecho e interés convino, ofreciendo pruebas y alegatos, por lo que se tuvo por ejercido su derecho a desahogar su garantía de audiencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y 129 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

IV. Por lo que hace a la responsabilidad administrativa atribuida a la **C. Juana Lourdes Barrera Morales**, en el acta administrativa visible a fojas 82 y 83 de los autos, señaló: "No acepto la irregularidad, ya que no entregue los documentos que se me atribuyen y no sé cómo llegaron a mi expediente, de hecho no hay un oficio en el que yo haya solicitado un escalafón para subir de puesto y exhibir los documentos, de hecho en mi talón de pago se puede verificar que sigo con el mismo código desde mil novecientos ochenta y uno, yo tengo mis papeles



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Expediente: CI/ISEM/OF/020/2017.

como pasante desde el ochenta y cinco para acá, en la anterior cita que nos hizo el Instituto en la Unidad Jurídico Consultiva aproximadamente en marzo o abril del año en curso, me dijeron que como era posible que yo estuviera trabajando si yo ingresé al Instituto con primaria y secundaria, posteriormente en mil novecientos ochenta y dos aproximadamente cursé la carrera de Enfermería...":

En la etapa de pruebas, la **C. Juana Lourdes Barrera Morales** ofreció: "...1. La documental pública consistente en la Carta de Pasante a nombre de la C. Juana Lourdes Barrera Morales, suscrita por el Director de la Escuela "Dr. Ángel Ruiz Nieto", con la cual se hace constar que culminó el Plan de Estudios de la carrera de Enfermería General, actividad que desde mil novecientos ochenta y uno ha desempeñado en el Instituto de Salud del Estado de México, prueba que se ofrece para acreditar que la C. Juana Lourdes Barrera Morales nunca ha ejercido o se ha ostentado con una carrera o con un nivel distinto al ya mencionado; 2. La documental pública consistente en el recibo de nómina número [REDACTED] del periodo de pago del dieciséis al treinta de septiembre de dos mil diecisiete, en la cual se aprecia la fecha de ingreso al Instituto de Salud del Estado de México, primero de julio de mil novecientos ochenta y uno y un puesto técnico en Atención Primaria a la Salud, mismo que bajo protesta de decir verdad no ha tenido ningún movimiento escalafonario o beneficio económico alguno, la cual se ofrece para hacer constar que no se ha recibido ningún beneficio económico toda vez que la suscrita por el nivel de preparación no es acreedora al mismo...".

En la etapa de alegatos, la **C. Juana Lourdes Barrera Morales**, refirió: "Visto el contenido del expediente en el que se actúa se solicita a esta H. autoridad se resuelva sin sanción para la C. Juana Lourdes Barrera Morales, toda vez que como se desprende de los autos ella no reconoce haber exhibido las documentales que se presumen apócrifas consistentes en Título y Cédula Profesional a su nombre al no haber cursado ella dichos estudios desconociendo en su totalidad como fue que llegaron a su expediente, no obstante lo anterior no ha recibido beneficio alguno de dichos documentos y mucho menos los ha solicitado toda vez que por su preparación no tendría derecho a requerir re nivelación alguna por lo que no existen elementos para sancionarla...".

Por lo anterior, se procede al análisis y valoración de la instrumental de actuaciones que integra el expediente que se resuelve, en relación con las manifestaciones, pruebas y alegatos vertidos por la **C. Juana Lourdes Barrera Morales**, conforme a las reglas de la lógica y la sana crítica en términos de los artículos 95, 100 y 105 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, toda vez que en el citatorio a garantía de audiencia, se atribuyó a la implicada que en su calidad de servidor público adscrita al Instituto de Salud del Estado de México, exhibió copia del Título y cédula profesional con folio [REDACTED] que la ostentan como Enfermera General Obstetra, supuestamente expedidos por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, respectivamente, aun cuando dichos documentos no fueron expedidos a su favor, como se advierte del oficio DGAE/DCyCD/1159/2017 visible a foja 60 de los autos, suscrito por el Director General de Administración Escolar de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que informó: "...En atención a su oficio No. 217B11000/02119/2017... mediante el cual solicita la validación de dos títulos de Enfermera General Obstetra emitidos supuestamente por la UNAM a las CC... **JUANA LOURDES BARRERA MORALES**... realizada una búsqueda en el Archivo General y en el Sistema Integral de Administración Escolar **no se localizaron antecedentes de las referidas personas como alumnas de esta Universidad** o de alguna Institución incorporada a ésta..."; y DGP/DJ/1690/2017, visible a foja 58 de los autos, suscrito por la Directora de Autorización y Registro Profesional de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en la que señaló: "...En atención a su oficio número 217B11203/353/2017... mediante el cual solicita se informe si esta Dirección de Profesiones cuenta con registro a favor de los C.C. **JUANA LOURDES BARRERA MORALES**, bajo el número de cédula profesional [REDACTED] misma que supuestamente le acredita para ejercer como Enfermera General Obstetra... después de haber realizado una búsqueda en los archivos de esta Unidad Administrativa, **NO SE LOCALIZÓ registro profesional a favor de los C.C. JUANA LOURDES BARRERA MORALES**, bajo el número de cédula profesional [REDACTED] misma que supuestamente le acredita para ejercer como Enfermera General Obstetra... Asimismo se comenta que los números de cédula profesional [REDACTED] corresponden a otras personas... (...) ...las copias imples que anexa de las cédula profesional números [REDACTED] mismas que acreditan para ejercer como Enfermera General Obstetra, a favor de los C.C. **JUANA LOURDES BARRERA MORALES**... supuestamente expedidas por esta Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, la misma **se desconoce** y por lo tanto, se presume **apócrifa**...", es decir, en la Universidad Nacional Autónoma de México, no existen antecedentes de que la **C. Juana Lourdes Barrera Morales** haya sido alumna de la citada Universidad o bien de alguna institución incorporada; asimismo, en el Registro Nacional de Profesionistas no existe antecedente profesional de la servidor público como Enfermera General Obstetra y el número de la cédula profesional [REDACTED] exhibido corresponde a otra persona, por lo que el título que exhibió no cuenta con sustento académico y la cédula que presentó



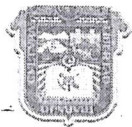
"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Expediente: CI/ISEM/OF/020/2017.

corresponde a otra persona, no obstante, fueron exhibidos por la servidor público, con el firme propósito de que se agregaran a su expediente personal; faltando con su conducta a los principios de legalidad, honradez y lealtad, que rigen la prestación del servicio público, ya que abusando de la buena fe del Instituto de Salud del Estado de México, se ostenta con una profesión de Enfermera General Obstetra sin que la documentación exhibida por la implicada tenga sustento académico

Cabe destacar que el uno de junio de mil novecientos ochenta y uno, la **C. Juana Lourdes Barrera Morales** ingresó al Instituto de Salud del Estado de México, a efecto de prestar servicio público, tal como se corrobora con el oficio 217B32100/07506/2017, visible a fojas 14 a 15 de los autos, suscrito por el Subdirector de Recursos Humanos del Instituto de Salud del Estado de México, de la que se observa: "...BARRERA MORALES JUANA LOURDES... Ingresó el 01 de junio 1981...", adquiriendo así la calidad de servidor público, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios que cita: "**Artículo 2.** Son sujetos de esta Ley, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza en la administración pública estatal o municipal, en sus organismos auxiliares y fideicomisos públicos, y en los poderes Legislativo, Judicial del Estado y en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México".

En ese tenor, y de la inspección 041-0188-2017 denominada al perfil académico del personal adscrito a la Jurisdicción Sanitaria Ecatepec del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del uno al diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, realizada por la Subdirección de Auditoría a Salud y Regulación Sanitaria de esta Contraloría Interna, detectó entre otros, que la **C. Juana Lourdes Barrera Morales** tiene agregada a su expediente personal una cedula profesional cuyos datos no corresponden a los asentados en el Registro Nacional de Profesionistas, tal como fue precisado en el oficio 217B11300/028/2017, visible a foja 2 de los autos, documental que al ser adminiculada y concatenada con la impresión del resultado de la consulta realizada por el personal adscrito a este Órgano de Control Interno en el vínculo de la página electrónica (<https://www.gob.mx/>)>Inicio (<http://www.gob.mx/sep>) > Cedula Profesional del Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, visible a fojas 5 y 6 de los autos, se advierte: "...DATOS DE CONSULTA Nombre(S)*: **JUANA LOURDES** Primer apellido*: **BARRERA** Segundo apellido **MORALES**...", y "...RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA * **No se encontraron resultados**...", mientras que a foja 7, se observa: "...DETALLE DEL REGISTRO *Número de Cédula [REDACTED] Nombre [REDACTED] Profesión: [REDACTED] Año de expedición: **1992** Institución: **UNIVERSIDAD REGIOMONTANA**...", lo cual, al ser adminiculado y relacionado con el oficio DGAE/DCyCD/1159/2017, visible a foja 60 de los autos, suscrito por el Director General de Administración Escolar de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que informó: "...En atención a su oficio No. 217B11000/02119/2017... mediante el cual solicita la validación de dos títulos de Enfermera General Obstetra emitidos supuestamente por la UNAM a las CC... **JUANA LOURDES BARRERA MORALES**... realizada una búsqueda en el Archivo General y en el Sistema Integral de Administración Escolar **no se localizaron antecedentes de las referidas personas como alumnas de esta Universidad** o de alguna Institución incorporada a ésta...", así como el oficio DGP/DJ/1690/2017, visible a foja 58 de los autos, suscrito por la Directora de Autorización y Registro Profesional de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en la que señaló: "...En atención a su oficio número 217B11203/353/2017... mediante el cual solicita se informe si esta Dirección de Profesiones cuenta con registro a favor de los C.C. **JUANA LOURDES BARRERA MORALES**, bajo el número de cédula profesional [REDACTED] misma que supuestamente le acredita para ejercer como Enfermera General Obstetra... misma que supuestamente le acredita para ejercer como Enfermera General Obstetra... después de haber realizado una búsqueda en los archivos de esta Unidad Administrativa, **NO SE LOCALIZÓ registro profesional a favor de los C.C. JUANA LOURDES BARRERA MORALES**, bajo el número de cédula profesional [REDACTED] misma que supuestamente le acredita para ejercer como Enfermera General Obstetra... Asimismo se comenta que los números de cédula profesional [REDACTED] y [REDACTED] corresponden a otras personas... (...) ...las copias imples que anexa de las cédula profesional números [REDACTED] mismas que acreditan para ejercer como Enfermera General Obstetra, a favor de los C.C. **JUANA LOURDES BARRERA MORALES**... supuestamente expedidas por esta Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, la misma **se desconoce** y por lo tanto, se presume **apócrifa**...", documentales que al ser analizadas y valoradas en su conjunto de conformidad con las reglas de la lógica y la sana crítica en términos de los artículos 95, 100 y 105 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, son suficientes para



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Expediente: CI/ISEM/OF/020/2017.

demostrar que la **C. Juana Lourdes Barrera Morales** faltó a los principios de legalidad, honradez y lealtad que rigen la prestación del servicio público, toda vez que de la consulta a las páginas electrónicas en cita, se advierte que la cédula profesional [REDACTED] que obra en el expediente de la citada servidor pública corresponde a otra persona.

Consecuentemente, la **C. Juana Lourdes Barrera Morales** en su calidad de servidor público adscrita al Instituto de Salud del Estado de México, contravino los principios de legalidad, honradez y lealtad que rigen el servicio público, contemplados en el artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Lo anterior es así, toda vez que las manifestaciones de defensa de la **C. Juana Lourdes Barrera Morales** vertidas en el acta administrativa de siete de noviembre de dos mil diecisiete, visible a fojas 82 y 83 de los autos, consistente en: *"No acepto la irregularidad, ya que no entregue los documentos que se me atribuyen y no sé cómo llegaron a mi expediente, de hecho no hay un oficio en el que yo haya solicitado un escalafón para subir de puesto y exhibir los documentos, de hecho en mi talón de pago se puede verificar que sigo con el mismo código desde mil novecientos ochenta y uno, yo tengo mis papeles como pasante desde el ochenta y cinco para acá, en la anterior cita que nos hizo el Instituto en la Unidad Jurídico Consultiva aproximadamente en marzo o abril del año en curso, me dijeron que como era posible que yo estuviera trabajando si yo ingresé al Instituto con primaria y secundaria, posteriormente en mil novecientos ochenta y dos aproximadamente cursé la carrera de Enfermería..."*, son argumentos que al ser analizados con estricto apego a las reglas de la lógica, la sana crítica y los artículos 95 y 105 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, son insuficientes para desestimar la responsabilidad administrativa que le fue atribuida en el citatorio a garantía de audiencia 217B11000/05419/2017, ya que si bien la **C. Juana Lourdes Barrera Morales** expresa una negativa lisa y llana de haber incurrido en la irregularidad que se le atribuyó, también es, que de los autos del expediente que se resuelve, se advierten pruebas documentales que administradas entre sí, permiten a este Órgano de Control Interno arribar a la conclusión de que la implicada incumplió los principios de legalidad, honradez y lealtad que rigen el servicio público, toda vez que en el expediente personal que se encuentra en los archivos del Instituto de Salud del Estado de México obra copia de Título y cédula profesional [REDACTED] que la acreditan como Enfermera General Obstetra, sin que dichas documentales tengan sustento académico, de conformidad con los oficios signados por el Director General de Administración Escolar de la Universidad Nacional Autónoma de México y Directora de Autorización y Registro Profesional de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, agregados a fojas 60y 45 de los autos respectivamente, de los cuales se omite su transcripción.

En ese orden de ideas, del expediente personal de la implicada, remitido por la Subdirección de Recursos Humanos, que obra en los archivos del Instituto de Salud del Estado de México, se advierte las siguientes documentales:

1. Copia de cédula profesional visible a foja 21 de los autos, de la que se advierte: *"...SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES [REDACTED] EN VIRTUD DE QUE JUANA LOURDES BARRERA MORALES CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PROFESIONES Y SU REGLAMENTO SE LE EXPIDE LA PRESENTE CÉDULA CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE *ENFERMERA GENERAL OBSTETRA*..."*.
2. Copia de Título de Enfermera General Obstetra, visible a foja 22 de los autos, de la que se advierte: *"...La Universidad Nacional Autónoma de México otorga a C. Juana Lourdes Barrera Morales el título de Enfermera General Obstetra... 21 de agosto de 1995..."*.

Documentos que valorados en términos de la lógica y la sana crítica de conformidad con los artículos 95, 100 y 105 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, permiten a esta autoridad administrativa asumir plena convicción en el sentido de que la **C. Juana Lourdes Barrera Morales** se ostenta con título y cédula profesional [REDACTED] que la acreditan como Enfermera General Obstetra, documentales que fueron exhibidas por la ahora responsable con el firme propósito de que fueran agregadas a su expediente



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Expediente: CI/ISEM/OF/020/2017.

personal, mismas que exhibió aun cuando no cuentan con sustento académico, toda vez que al ser analizadas en contraposición a los oficios DGAE/DCyCD/1159/2017 visible a foja 60 de los autos, suscrito por el Director General de Administración Escolar de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que informó: "...En atención a su oficio No. 217B11000/02119/2017... mediante el cual solicita la validación de dos títulos de Enfermera General Obstetra emitidos supuestamente por la UNAM a las CC... **JUANA LOURDES BARRERA MORALES**... realizada una búsqueda en el Archivo General y en el Sistema Integral de Administración Escolar **no se localizaron antecedentes de las referidas personas como alumnas de esta Universidad** o de alguna Institución incorporada a ésta..."; y DGP/DJ/1690/2017, visible a foja 58 de los autos, suscrito por la Directora de Autorización y Registro Profesional de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en la que señaló: "...En atención a su oficio número 217B11203/353/2017... mediante el cual solicita se informe si esta Dirección de Profesiones cuenta con registro a favor de los C.C. **JUANA LOURDES BARRERA MORALES**, bajo el número de cédula profesional [REDACTED] misma que supuestamente le acredita para ejercer como Enfermera General Obstetra... después de haber realizado una búsqueda en los archivos de esta Unidad Administrativa, **NO SE LOCALIZÓ registro profesional a favor de los C.C. JUANA LOURDES BARRERA MORALES**, bajo el número de cédula profesional [REDACTED] misma que supuestamente le acredita para ejercer como Enfermera General Obstetra... Asimismo se comenta que los números de cédula profesional [REDACTED].. corresponden a otras personas... (...) ...las copias imple que anexa de las cédula profesional números [REDACTED] mismas que acreditan para ejercer como Enfermera General Obstetra, a favor de los C.C. **JUANA LOURDES BARRERA MORALES**... supuestamente expedidas por esta Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, la misma **se desconoce** y por lo tanto, se presume **apócrifa**..."; adminiculados con impresión del resultado obtenido de la consulta realizada por el personal adscrito a este Órgano de Control Interno en el vínculo de la página electrónica (<https://www.gob.mx/>)>Inicio (<http://www.gob.mx/sep>) > Cédula Profesional del Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, visible a fojas 5 y 6 de los autos, de la que se advierte: "...DATOS DE CONSULTA Nombre(s): **JUANA LOURDES** Primer apellido*: **BARRERA** Segundo apellido **MORALES**...", y "...RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA * **No se encontraron resultados**...", mientras que a foja 7, se observa: "...DETALLE DEL REGISTRO *Número de Cédula [REDACTED] Nombre [REDACTED] Profesión: [REDACTED] Año de expedición: **1992** Institución: **UNIVERSIDAD REGIOMONTANA**...", constituyen evidencias probatorias idóneas y suficientes, las cuales permiten a esta Contraloría Interna emitir un juicio debidamente fundado y motivado, respecto a la responsabilidad administrativa en que incurrió la servidor público implicada, al haberse acreditado fehacientemente que exhibió copia de Título y cédula profesional con folio [REDACTED] que la ostentan como Enfermera General Obstetra, supuestamente expedidos por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, respectivamente, aun cuando dichos documentos no fueron expedidos a su favor y que obran en su expediente personal resguardado en la Subdirección de Recursos Humanos del Instituto de Salud del Estado de México, tal como se corrobora con el oficio 217B32100/07506/2017, visible a fojas 14 a 15 de los autos, lo anterior, ya que como se advierte del oficio DGAE/DCyCD/1159/2017, visible a foja 60 de los autos, suscrito por el Director General de Administración Escolar de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que informó: "...En atención a su oficio No. 217B11000/02119/2017... mediante el cual solicita la validación de dos títulos de Enfermera General Obstetra emitidos supuestamente por la UNAM a las CC... **JUANA LOURDES BARRERA MORALES**... realizada una búsqueda en el Archivo General y en el Sistema Integral de Administración Escolar **no se localizaron antecedentes de las referidas personas como alumnas de esta Universidad** o de alguna Institución incorporada a ésta...", en la Universidad Nacional Autónoma de México, no existen antecedentes de la **C. Juana Lourdes Barrera Morales**, como alumna de dicha Institución o de alguna incorporada a la citada Universidad; asimismo, en el Sistema Nacional del Registro de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública no existe antecedente profesional de la implicada como Enfermera General Obstetra, y el número de cédula profesional con folio [REDACTED] corresponde a otra persona, tal como lo informó la Directora de Autorización y Registro Profesional de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en el oficio DGP/DJ/1690/2017, visible a foja 58 de los autos, en el que señaló: "...En atención a su oficio número 217B11203/353/2017... mediante el cual solicita se informe si esta Dirección de Profesiones cuenta con registro a favor de los C.C. **JUANA LOURDES BARRERA MORALES**, bajo el número de cédula profesional [REDACTED] misma que supuestamente le acredita para ejercer como Enfermera General Obstetra... misma que supuestamente le acredita para ejercer como Enfermera General Obstetra... después de haber realizado una búsqueda en los archivos de esta Unidad Administrativa, **NO SE LOCALIZÓ registro profesional a favor de los C.C. JUANA LOURDES BARRERA MORALES**, bajo el número de cédula profesional [REDACTED] misma que



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Expediente: **CI/ISEM/OF/020/2017.**

supuestamente le acredita para ejercer como Enfermera General Obstetra... Asimismo se comenta que los números de cédula profesional [REDACTED] y [REDACTED] corresponden a otras personas... (...) ...las copias imples que anexa de las cédula profesional números [REDACTED] mismas que acreditan para ejercer como Enfermera General Obstetra, a favor de los C.C. JUANA LOURDES BARRERA MORALES... supuestamente expedidas por esta Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, la misma *se desconoce* y por lo tanto, se presume *apócrifa*...", por lo que el título y cédula profesional exhibidos por la implicada no cuentan con sustento académico, no obstante la **C. Juana Lourdes Barrera Morales**, los exhibió con el firme propósito de que se agregaran a su expediente personal, faltando con su conducta a los principios de legalidad, honradez y lealtad, que rigen la prestación del servicio público, ya que abusando de la buena fe del Instituto de Salud del Estado de México, se ostenta con una profesión de Enfermera General Obstetra sin que la documentación exhibida por la implicada tenga sustento académico.

Es por lo anterior, que las manifestaciones de la **C. Juana Lourdes Barrera Morales** resultan inoperantes, al intentar hacer valer en su favor el hecho de no haber solicitado escalafón con la finalidad de subir de puesto, como lo señaló, situación similar acontece con las manifestaciones de la servidor público, en las que arguye que la documentación con que cuenta, la acreditan como pasante, esto es así, ya que contrario a dichas aseveraciones, se ha demostrado plenamente que en el expediente personal de la implicada, resguardado en la Subdirección de Recursos humanos del instituto de Salud del Estado de México, se encuentran glosados copia de título y cédula profesional con folio [REDACTED] que la ostentan como Enfermera General Obstetra; finalmente por lo que hace a la supuesta reunión que tuvo lugar en la Unidad Jurídico Consultiva de este Instituto de Salud, ello es inoperante, siendo que no existe evidencia que sustente dicha aseveración.

El razonamiento expuesto, encuentra apoyo en la tesis aislada número I. 6o. T. 80 L, visible en la página 1131 del Libro 1, tomo II, de diciembre 2013, de los Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra señala:

FALTA DE PROBIDAD U HONRADEZ. LA CONSTITUYE LA EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS FALSOS AL PATRÓN, AUN CUANDO ÉSTOS NO HAYAN SIDO PRESENTADOS PARA OBTENER EL EMPLEO. La otrora Cuarta Sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia publicada en la página 111 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Quinta Parte, Volúmenes 133-138, de rubro: "PROBIDAD U HONRADEZ, FALTA DE CONCEPTO"; determinó que la falta de probidad u honradez consiste en no proceder rectamente en las funciones encomendadas, con mengua de rectitud de ánimo, o sea, apartarse de las obligaciones que se tienen a cargo procediendo en su contra, dejando de hacer lo que se tiene encomendado, o haciéndolo en contra; y que debe estimarse que no es necesario para que se integre la falta de probidad u honradez que exista un daño patrimonial o un lucro indebido, sino sólo que se observe una conducta ajena a un recto proceder. Atento a dicho concepto, la presentación de documentos falsos ante el patrón constituye una conducta que se aparta del recto proceder, motivo por el que se genera la falta de probidad del empleado, pues con su actitud revela falta de honradez en la relación laboral, aun cuando dichos documentos no hubieren sido presentados para obtener el empleo.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 951/2013. Eduardo Barrera Balanzario. 10 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Norma Nelia Figueroa Salmorán.

PRINCIPIO CONTRACTUAL DE BUENA FE. EL GENERAR UNA APARIENCIA JURÍDICA ATENTA EN SU CONTRA. Se falta a la buena fe cuando se realizan uno o varios actos para beneficiarse, directa o indirectamente, de modo intencional, con la creación de una apariencia jurídica, que a la postre defrauda la confianza depositada por otros sujetos, en tanto con dicho proceder se contradice una inicial manifestación de voluntad, que generó expectativas de derechos, que no se cumplen hasta su normal culminación; lo que a su vez atenta contra la seguridad jurídica



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Expediente: CI/ISEM/OF/020/2017.

que debe existir en todo ámbito para el eficaz desarrollo de las relaciones de derecho; de ahí que no puede desconocerse la existencia de ciertas situaciones de hecho, revestidas de una apariencia de solidez y rectitud.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 740/2010. Spectrasite Communications, Inc. 15 de diciembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca.

PRINCIPIO DE BUENA FE CONTRACTUAL. IMPLICA UNA CONDUCTA DE COOPERACIÓN Y DE GENERACIÓN DE CONFIANZA ENTRE LOS CONTRATANTES. La buena fe exige en los sujetos una positiva actitud de cooperación y generación de confianza en las propias manifestaciones de voluntad, aun las emitidas a través de un sujeto diverso, que si bien tiene personalidad propia conforme a la regulación legal, ha cedido su aptitud para obligarse y decidir motu proprio, a quien por ser su creador ejerce un control sobre su persona; manteniéndose de ese modo la palabra empeñada, y trascendiendo dicho principio como un límite para el ejercicio de los derechos subjetivos involucrados. Así se estima porque todo derecho que la norma confiere a sus destinatarios, debe ejercitarse con moderación y prudencia, sobre todo cuando choca con intereses contrarios; de modo que la buena fe sólo opera en las relaciones intersubjetivas, en tanto pueda asumirse que uno de los sujetos no puede esperar del otro una conducta perjudicial a los intereses manifestados y concretados conforme a la propia ley, es decir, debe actuarse con una lealtad contractual.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 740/2010. Spectrasite Communications, Inc. 15 de diciembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca.

De lo anterior se desprende que con el actuar de la implicada, al haber exhibido diversas documentales que la ostentan con una profesión de Enfermera General Obstetra de la que carece, engañó dolosamente al Instituto de Salud del Estado de México, pues si bien no obtuvo beneficio directo o indirecto a su favor, lo cierto es, que abuso de la confianza del Instituto de Salud, exhibiendo las multitudes documentales con la intención de que las mismas fueran agregadas a su expediente personal.

En la etapa de pruebas, la **C. Juana Lourdes Barrera Morales** ofreció: "...1. La documental pública consistente en la Carta de Pasante a nombre de la C. Juana Lourdes Barrera Morales, suscrita por el Director de la Escuela "Dr. Ángel Ruiz Nieto"... 2. La documental pública consistente en el recibo de nómina número [REDACTED] del periodo de pago del dieciséis al treinta de septiembre de dos mil diecisiete, en la cual se aprecia la fecha de ingreso al Instituto de Salud del Estado de México, primero de julio de mil novecientos ochenta y uno y un puesto técnico en Atención Primaria a la Salud, mismo que bajo protesta de decir verdad no ha tenido ningún movimiento escalafonario o beneficio económico alguno, la cual se ofrece para hacer constar que no se ha recibido ningún beneficio económico toda vez que la suscrita por el nivel de preparación no es acreedora al mismo...", pruebas que al ser analizadas y valoradas en términos de lo dispuesto por los artículos 95, 104 y 105 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se les otorga el valor probatorio pretendido por la oferente, por las siguientes razones y consideraciones:

Por lo que hace a la Carta de Pasante de la carrera de Enfermería General, probanza que al ser analizada y valorada de conformidad con los artículos 95, 104 y 105 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no beneficia a los intereses de la oferente, contrario a ello, le perjudican, en razón que dicha documental permite acreditar fehacientemente que la servidor público implicada no cuenta con la profesión de Enfermera General Obstetra, con la que se ostenta, y que se robustece con la copia de título y cédula profesional con folio [REDACTED] que obran agregados a su expediente personal, resguardado en la Subdirección de Recursos Humanos del Instituto de Salud del Estado de México;



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Expediente: CI/ISEM/OF/020/2017.

es decir, se colige que la implicada tiene pleno conocimiento de que no cuenta con dicha profesión, no obstante exhibió las documentales de referencia que la acreditan con la misma, resultando insuficiente el supuesto desconocimiento de dichas documentales, y como llegaron a su expediente personal, pues debe decirse que los únicos servidores públicos que pueden agregar o integrar documentos al mismo, lo son el interesado y en su caso el servidor público encargado de recabar la información y documentación correspondiente, quien derivado de la exhibición del servidor público, debe agregar la información correspondiente al expediente que corresponda.

Finalmente, por lo que hace al talón de pago, agregado a foja 86 de los autos, probanza que al ser analizada y valorada de conformidad con los artículos 95, 104 y 105 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no favorece los intereses de la oferente, ya que si bien, de dicha documental se puede advertir que al veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, la implicada seguía desempeñándose como Técnico en Atención Primaria a la Salud, no menos cierto es que la irregularidad que se le atribuyó fue por la exhibición del título y cédula profesional que la acreditan como Enfermera General Obstetra, sin que las documentales exhibidas cuenten con sustento académico, no así, el haber obtenido algún beneficio o bien haber escalonado en algún puesto o cargo; luego entonces, dicha probanza es insuficiente para desestimar su responsabilidad administrativa.

Aunado a lo anterior, de la presuncional e instrumental de actuaciones que integra el expediente que se resuelve, se advierten elementos idóneos y suficientes para acreditar que la implicada exhibió copia de título y cédula profesional [REDACTED] que la acreditan como Enfermera General Obstetra, supuestamente expedidos por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Dirección General de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, con el firme propósito de que fueran agregados a su expediente personal, sin embargo, de la indagatoria realizada por esta Contraloría Interna, se advirtió que dichas documentales no fueron expedidas a favor de la implicada, por lo que al haber exhibido dichas documentales, la **C. Juana Lourdes Barrera Morales** con su conducta incumplió los principios de legalidad, honradez y lealtad que rigen el servicio público, entendiéndose por **legalidad**, el principio jurídico en virtud del cual los ciudadanos y todos los Poderes Públicos están sometidos a las leyes y al Derecho, **honradez**, entendido como la rectitud de ánimo y la integridad en el obrar y **lealtad**, como la firmeza en los afectos y en las ideas que lleva a no engañar ni traicionar a los demás; ya que abusando de la buena fe del Instituto de Salud del Estado de México, se ostenta con una profesión de Enfermera General Obstetra sin que la documentación que exhibió y fue agregada a su expediente personal tenga sustento académico alguno; tal como se ha demostrado con las documentales que se encuentra integrada a la instrumental de actuaciones, que conforma el expediente del procedimiento administrativo **CI/ISEM/OF/020/2017**.

Esto implica que de su estudio no se aprecian medios de convicción para desvirtuar la responsabilidad administrativa atribuida a la servidor público implicada, ya que de las constancias que integran el presente expediente que se resuelve, así como de las presunciones resultantes, se desprenden probanzas que permiten a este Órgano de Control Interno emitir un juicio debidamente fundado y motivado, señalando los preceptos legales aplicables al caso, y las razones que se tuvieron en consideración para arribar a la conclusión de que la **C. Juana Lourdes Barrera Morales**, es administrativamente responsable de la irregularidad que se le atribuye en su calidad de servidor público adscrita al Instituto de Salud del Estado de México.

El razonamiento antes expuesto encuentra apoyo en la tesis aislada número XX.305K, visible en la página 291, tomo XV - Enero, Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra señala:

"PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA NO TIENE VIDA PROPIA. LAS. Las pruebas instrumental de



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Expediente: CI/ISEM/OF/020/2017.

actuaciones y la Presuncional Legal y Humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tiene vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, está se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos." (sic)

En la etapa de alegatos, la **C. Juana Lourdes Barrera Morales**, reiteró su desconocimiento de las documentales que le fueran atribuidas; sin embargo, dicho argumento es insuficiente para desestimar su responsabilidad administrativa, al no encontrarse robustecido con algún elemento probatorio que por sí o adminiculado con algún otro, sean suficientes para crear en el ánimo de esta autoridad administrativa dicha convicción; aunado a no combatir de manera directa la irregularidad que le fue atribuida; asimismo, resalta la falta de beneficio económico, circunstancia que no es materia de Litis en el presente procedimiento que por esta vía se resuelve, en consecuencia resulta inoperante su solicitud de emitir en su favor resolución en la que se declare la inexistencia de responsabilidad, toda vez que la misma ha quedado plenamente acreditada en el presente instrumento jurídico.

En ese orden de ideas, se demuestra que la **C. Juana Lourdes Barrera Morales** en su calidad de servidor público adscrita al Instituto de Salud del Estado de México, incumplió los principios que como servidor público tiene que observar, en específico los contenidos en el artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; que a la letra dice:

*"... Artículo 42. Para salvaguardar la **legalidad, honradez, lealtad**, imparcialidad y eficacia que deban ser observadas en la prestación del servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público sin perjuicio de sus derechos y deberes laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general..."*

Supuesto que se actualiza en razón de que la **C. Juana Lourdes Barrera Morales**, no cumplió con los principios de **legalidad, honradez y lealtad** que rige el servicio público, entendiéndose por **legalidad**, el principio jurídico en virtud del cual los ciudadanos y todos los Poderes Públicos están sometidos a las leyes y al Derecho, **honradez**, entendido como la rectitud de ánimo y la integridad en el obrar y **lealtad**, como la firmeza en los afectos y en las ideas que lleva a no engañar ni traicionar a los demás, ya que abusando de la buena fe del Instituto de Salud del Estado de México, exhibió título y cédula profesional con folio [REDACTED] que la ostentan como Enfermera General Obstetra, supuestamente expedidos por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Dirección General de Profesiones respectivamente, con el propósito de que se agregaran a su expediente personal; sin embargo, de las constancias que obran en autos se advierte que en la base de datos de la Universidad Nacional autónoma de México, no existe registro alguno del Título supuestamente obtenido por la servidor público implicada, y de la consulta realizada al Registro Nacional de Profesionistas se observa que la Cédula profesional [REDACTED] corresponde a persona distinta a la **C. Juana Lourdes Barrera Morales**.

Concluyentemente, se acredita la irregularidad administrativa atribuida a la **C. Juana Lourdes Barrera Morales** con base en los documentos agregados en su expediente personal consistentes en el Título y cédula profesional con folio [REDACTED] supuestamente expedidos por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Dirección General de Profesiones, respectivamente, documentos que fueron exhibidos con el firme propósito de que se agregaran a su expediente personal, sin embargo, en la base de datos de la Universidad Nacional Autónoma de México, no existe registro alguno de título obtenido por la **C. Juana Lourdes Barrera Morales**, y de la consulta realizada al Registro Nacional de Profesionistas se observa que la cédula profesional [REDACTED] corresponde a persona distinta al implicado; es decir al [REDACTED] tal como se acredita con los oficios DGAE/DCyCD/1159/2017 visible a foja 60 de los autos, suscrito por el Director General de Administración Escolar de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que informó: "...En atención a su oficio No. 217B11000/02119/2017... mediante el cual solicita la validación de dos títulos de Enfermera General Obstetra emitidos supuestamente por la UNAM a las CC... **JUANA LOURDES BARRERA MORALES**...



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Expediente: CI/ISEM/OF/020/2017.

realizada una búsqueda en el Archivo General y en el Sistema Integral de Administración Escolar **no se localizaron antecedentes de las referidas personas como alumnas de esta Universidad** o de alguna Institución incorporada a ésta..."; y DGP/DJ/1690/2017, visible a foja 58 de los autos, suscrito por la Directora de Autorización y Registro Profesional de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en la que señaló: "...En atención a su oficio número 217B11203/353/2017... mediante el cual solicita se informe si esta Dirección de Profesiones cuenta con registro a favor de los C.C. **JUANA LOURDES BARRERA MORALES**, bajo el número de cédula profesional [REDACTED] misma que supuestamente le acredita para ejercer como Enfermera General Obstetra... después de haber realizado una búsqueda en los archivos de esta Unidad Administrativa, **NO SE LOCALIZÓ registro profesional a favor de los C.C. JUANA LOURDES BARRERA MORALES**, bajo el número de cédula profesional [REDACTED] misma que supuestamente le acredita para ejercer como Enfermera General Obstetra... Asimismo se comenta que los números de cédula profesional [REDACTED] corresponden a otras personas... (...) ...las copias imples que anexa de las cédula profesional números [REDACTED] mismas que acreditan para ejercer como Enfermera General Obstetra, a favor de los C.C. **JUANA LOURDES BARRERA MORALES**... supuestamente expedidas por esta Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, la misma **se desconoce** y por lo tanto, se presume **apócrifa**...", e impresión del resultado obtenido de la consulta realizada por el personal adscrito a este Órgano de Control Interno en el vínculo de la página electrónica (<https://www.gob.mx/>)>Inicio (<http://www.gob.mx/sep>) > Cedula Profesional de la página electrónica del Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, visible a fojas 5 y 6 de los autos, de la que se advierte: "...DATOS DE CONSULTA Nombre(s): **JUANA LOURDES** Primer apellido*: **BARRERA** Segundo apellido **MORALES**...", y "...RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA * **No se encontraron resultados**...", mientras que a foja 7, se observa: "...DETALLE DEL REGISTRO *Número de Cédula [REDACTED] Nombre [REDACTED] Profesión: [REDACTED] Año de expedición: **1992** Institución: **UNIVERSIDAD REGIOMONTANA**..."

de lo anterior, se desprende que la servidor público implicada no actuó con rectitud, legalidad, honradez y lealtad al exhibir diversos documentos que la ostentan con una profesión de Enfermera General Obstetra con el que no cuenta, esto es, debido a que dentro de su expediente personal que obra en la Subdirección de Recursos Humanos del Instituto de Salud del Estado de México, exhibió y se agregaron a dicho expediente personal copia de Título y Cédula Profesional con folio [REDACTED], que la acreditan como Enfermera General Obstetra, siendo esta la irregularidad que se le atribuye a la ahora implicada como servidor público, y aun cuando con dicha exhibición no obtuvo un lucro indebido o se causara daño al patrimonio del Instituto de Salud, o que, dichos documentos no fueron motivo de escalafón o requisito indispensable para ingresar al Instituto de Salud del Estado de México; también es que abusando de la buena fe del Instituto de Salud del Estado de México, también es que se ostenta con una profesión de Enfermera General Obstetra sin que la documentación exhibida por la implicada tenga sustento académico.

Cabe referir que la facultad disciplinaria encuentra su fundamento en el servicio público que el Estado debe prestar a la comunidad con excelencia, a fin de asegurar y controlar la calidad y continuidad de su actividad, que se instrumenta a través de las funciones, empleos, cargos y comisiones de los servidores públicos y que deben satisfacer los valores y cualidades de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia de la gestión y acción administrativa que trasciendan a la calidad y peculiaridades del servicio público para obtener los fines de la planeación y satisfacer las necesidades públicas con la mayor economía y calidad, de suerte que la administración tiene la facultad y la obligación de auto organizarse para cumplir sus objetivos y, en ese contexto, se inscribe el poder disciplinario como actividad de control.

Concluyentemente, se acredita la irregularidad administrativa atribuida a la **C. Juana Lourdes Barrera Morales**, con todos y cada uno de los elementos probatorios que obran en autos, mismos que al ser relacionados con los argumentos de la implicada y la instrumental de actuaciones que integra el expediente que se resuelve, al ser analizados y valorados con estricto apego a derecho, se determina que la **C. Juana Lourdes Barrera Morales** es administrativamente responsable de la irregularidad administrativa atribuida en el procedimiento que se resuelve, toda vez que incumplió los principios que como servidor público tiene que observar, en específico los contenidos en el artículo 42



“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante”.

Expediente: CI/ISEM/OF/020/2017.

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que a la letra dice:

“... Artículo 42. Para salvaguardar la **legalidad, honradez, lealtad**, imparcialidad y eficacia que deban ser observadas en la prestación del servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público sin perjuicio de sus derechos y deberes laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general...

Supuesto que se actualiza en razón de que la **C. Juana Lourdes Barrera Morales**, no cumplió con los principios de **legalidad, honradez y lealtad** que rige el servicio público, entendiéndose como tales, el modo de comportarse del que cumple con su deber respetando la ley, sin beneficiarse ni beneficiar a otros irregularmente; así como la rectitud de ánimo en el obrar, y por lealtad la firmeza en los afectos y en las ideas que lleva a no engañar ni traicionar a los demás, toda vez que exhibió copia de título y cédula profesional con folio [REDACTED] que la ostentan como Enfermera General Obstetra, supuestamente expedidos por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Dirección General de Profesiones respectivamente, con el propósito de que se agregaran a su expediente personal, sin embargo, de las constancias que obran en autos se advierte que la **C. Juana Lourdes Barrera Morales**, únicamente cuenta con carta de pasante en la carrera de Enfermería General, por lo que de ninguna manera se le pudo expedir en su favor el título de Enfermera General Obstetra, y de la consulta realizada al Registro Nacional de Profesionistas se observa que la Cédula profesional [REDACTED] corresponde a persona distinta a la **C. Juana Lourdes Barrera Morales**.

Concluyentemente, se acredita la irregularidad administrativa atribuida a la **C. Juana Lourdes Barrera Morales** con base en los documentos agregados en su expediente personal consistentes título y cédula profesional con folio [REDACTED] supuestamente expedidos por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Dirección General de Profesiones, respectivamente, documentos que fueron exhibidos con el firme propósito de que los mismos fueran agregados a su expediente personal, sin embargo, en la base de datos de la Universidad Nacional Autónoma de México, no existe registro alguno de título obtenido por la **C. Juana Lourdes Barrera Morales**, y de la consulta realizada al Registro Nacional de Profesionistas se observa que la cédula profesional con folio [REDACTED] corresponde a persona distinta a la implicada; de lo anterior, se desprende que la servidor público en cita no actuó con rectitud, honradez, legalidad y lealtad al ostentarse durante la prestación del servicio público con una profesión de Enfermera General Obstetra con la que no cuenta, esto es, debido a que dentro de su expediente personal que obra en la Subdirección de Recursos Humanos del Instituto de Salud, se encuentran glosadas copia del título y cédula profesional con folio [REDACTED] que la acreditan como Enfermera General Obstetra, por lo que aun cuando con dicha exhibición no obtuvo un lucro indebido o se causara daño al patrimonio del Instituto de Salud, o que, dichos documentos no fueron motivo de escalafón o requisito indispensable para desempeñarse como Técnico en Atención Primaria a la Salud, ello no es suficiente para eximirla de responsabilidad administrativa.

Por lo anterior y atendiendo a lo vertido en el cuerpo de la presente resolución, se determina que la **C. Juana Lourdes Barrera Morales** es administrativamente responsable de la irregularidad atribuida en el procedimiento administrativo que se resuelve, por lo que se procede al análisis de los elementos de juicio previstos en el artículo 137 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y 49 párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, mismos que a continuación se motivan:

- a) Por lo que hace a la **gravedad de la infracción en que se incurra** dispuesta en la fracción I del artículo 137 del citado Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, e inciso a) del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, esta Contraloría Interna determina que la conducta en que incurrió la servidor público se considera de alta gravedad, ya que no se apegó a los principios de legalidad, honradez y lealtad que deben ser observados en el servicio público establecidos el artículo 42 de la Ley de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que señala: “Artículo 42. Para salvaguardar la **legalidad, honradez, lealtad**, imparcialidad y eficacia que deban ser observadas en la prestación



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Expediente: CI/ISEM/OF/020/2017.

del servicio público,, independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público sin perjuicio de sus derechos y deberes laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general...", esto, debido a que en su calidad de servidor público adscrita al Instituto de Salud del Estado de México, exhibió copia del título y cédula profesional con folio [REDACTED] que la ostentan como Enfermera General Obstetra, supuestamente expedidos a su favor, por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, respectivamente, con el propósito de que se agregaran a su expediente personal; sin embargo, de las constancias que obran en autos se advierte que en la base de datos de la Universidad Nacional Autónoma de México, no existe registro de que la implicada fue alumna de dicha institución o de alguna otra incorporada a la citada Universidad, consecuentemente, no existe registro del título supuestamente obtenido por la servidor público implicada, y de la consulta realizada al Registro Nacional de Profesionistas se observa que la cédula profesional con folio [REDACTED] corresponde a persona distinta a la **C. Juana Lourdes Barrera Morales**, por lo que se colige que dichos documentos son apócrifos, bajo esa tesitura, la conducta de la servidor público atentó contra los principios de legalidad, honradez y lealtad consagrados en el artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; ya que abusando de la buena fe con que se conduce el Instituto de Salud del Estado de México, entendiéndose por tal la probidad, empleando la denominación "probidad" como condición de bondad, rectitud o transparencia en el proceder de los empleados públicos, no obstante, exhibió documentos que la acreditan con una profesión de Enfermera General Obstetra con la que no cuenta, faltando con ello al principio de legalidad, entendiéndose por tal, la conducta que se efectúa respetando la ley, conduciéndose deshonestamente para con el Instituto de Salud, quien accedió a ingresar dichos documentos al expediente personal de la servidor público por considerarlos veraces; sin embargo, derivado de la indagatoria que llevó a cabo esta Unidad de Contraloría Interna se desprende que en la base de datos de la Universidad Nacional Autónoma de México, no existe registro alguno del título supuestamente obtenido por la servidor público implicada, y de la consulta realizada al Registro Nacional de Profesionistas se observa que la Cédula profesional con folio [REDACTED] corresponde a persona distinta a la **C. Juana Lourdes Barrera Morales**, por lo que al haber actuado de forma incorrecta e irregular, su actuar se considera de gravedad.

Sustentan lo expuesto la tesis número I.5o.C.48 C, visible en la página 1696, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 3, de los Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra señala:

PRINCIPIO DE BUENA FE CONTRACTUAL. APARTARSE DE LA CONDUCTA DEBIDA SE TRADUCE EN UN HECHO ILÍCITO. Los sujetos de derecho, por cuanto que exteriorizan su voluntad contractual y ésta constituye la norma individual a la que se sujetan, se constituyen a la vez en los propios Jueces de su conveniencia; el juzgador formal, en tanto es parte de la estructura judicial del Estado, lo será en caso del abuso, de la lesión, o de la mala fe de los intervinientes, no de la apariencia contractual que pudiera nunca descubrirse. Conforme a ello, el apartarse de la buena fe, comporta una conducta ilícita, sancionable por el derecho, en los términos previstos en el artículo 1910 del Código Civil Federal. Así se considera, porque la protección de la confianza suscitada y la seguridad misma de los actos jurídicos, exigen que quien contribuye con su actuación a crear una determinada situación de hecho cuya apariencia resulta verosímil conforme a la normatividad legal y contractual aplicables, debe asumir las consecuencias que de ello deriven; de manera que no resulte lícito apartarse ni querer evadirse de ellas.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 740/2010. Spectrasite Communications, Inc. 15 de diciembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca.

Así como la tesis aislada número I.5o.C.51 C, visible en la página 1698, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, de los Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra señala:



PRINCIPIO DE BUENA FE CONTRACTUAL. IMPLICA UNA CONDUCTA DE COOPERACIÓN Y DE GENERACIÓN DE CONFIANZA ENTRE LOS CONTRATANTES. La buena fe exige en los sujetos una positiva actitud de cooperación y generación de confianza en las propias manifestaciones de voluntad, aun las emitidas a través de un sujeto diverso, que si bien tiene personalidad propia conforme a la regulación legal, ha cedido su aptitud para obligarse y decidir motu proprio, a quien por ser su creador ejerce un control sobre su persona; manteniéndose de ese modo la palabra empeñada, y trascendiendo dicho principio como un límite para el ejercicio de los derechos subjetivos involucrados. Así se estima porque todo derecho que la norma confiere a sus destinatarios, debe ejercitarse con moderación y prudencia, sobre todo cuando choca con intereses contrarios; de modo que la buena fe sólo opera en las relaciones intersubjetivas, en tanto pueda asumirse que uno de los sujetos no puede esperar del otro una conducta perjudicial a los intereses manifestados y concretados conforme a la propia ley, es decir, debe actuarse con una lealtad contractual.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 740/2010. Spectrasite Communications, Inc. 15 de diciembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca.

Por lo que al haber abusado de la confianza del Instituto de Salud del Estado de México, faltó al principio de lealtad, entendido como la firmeza en los afectos y en las ideas que lleva a no engañar ni traicionar a los demás, consecuentemente, la **C. Juana Lourdes Barrera Morales**, debe ser sancionada bajo los considerandos expuestos en el cuerpo del presente resolutivo.

Cabe precisar que la conducta de la servidor público implicada se traducen en condicionantes reveladoras de la trascendencia social que puede ocasionarse con el acto de usar documentos apócrifo, lo que es razonable por la existencia per se, sobre todo tratándose de documentos públicos, necesariamente conduce a establecer una afectación real o potencial al bien jurídico tutelado, no sólo cuando con esa elaboración o acto material de alteración o falsificación, concurren, además, el propósito de obtener algún provecho para sí o para otro o causar un perjuicio en contra de terceros y que la falsificación sea sin el consentimiento del tercero potencialmente afectado, que es la certeza y veracidad que corresponde a la expedición de documentos, de modo que, resulta obvio que todo aquel que use un documento a sabiendas de su falsedad o apocrificidad, denota la intención de obtener algún tipo de beneficio y la potencial transgresión, por razón del estado de peligro que produce, al bien jurídico, ello en función de su naturaleza que presupone el uso consciente de un documento apócrifo, de manera que se presumen las peculiaridades de dicha falsificación.

- b) Respecto a **los antecedentes de la infractora**, establecidos en la **fracción II** del artículo 137 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en relación con el **inciso b)** correspondiente a **nivel jerárquico, antigüedad y las condiciones de la infractora en el servicio público** del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de referencia, debe decirse que de las constancias del expediente que se resuelve se advierte que la **C. Juana Lourdes Barrera Morales** tiene una antigüedad en el Instituto de Salud del Estado de México de treinta y cinco años nueve meses, al haber ingresado al Instituto de Salud del Estado de México el uno de junio de mil novecientos ochenta y uno, tal como se desprende del oficio 217B32100/07506/2017, suscrito por el Subdirector de Recursos Humanos del Instituto de Salud del Estado de México, visible a foja 14 y 15 de los autos; de lo que se concluye que desde que la servidor público exhibió en el Instituto de Salud la copia del título y cédula profesional con folio [REDACTED] la implicada hacía uso de documentos presuntamente apócrifos que la ostentaban con una profesión de Enfermera General Obstetra que no tiene, incumpliendo los principios que deben observarse en el servicio público y que se encuentran establecidos en el artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, al haber exhibido copia del título y cédula profesional con folio [REDACTED]



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Expediente: CI/ISEM/OF/020/2017.

█ que la ostentan como Enfermera General Obstetra, supuestamente expedidos a su favor por la Universidad Nacional Autónoma México y la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, respectivamente, con el propósito de que se agregaran a su expediente personal, a sabiendas de que dichos documentos no fueron expedidos a favor de la implicada; por tanto, ello culminó en responsabilidad administrativa para la citada servidor público, lo que se constituye como una agravante para determinar la sanción impuesta a la servidor público con motivo de cargo, ya que debió abstenerse de exhibir dichos documentos al Instituto de Salud del Estado de México, contrario a ello, abusando de la buena fe con la que se conduce el Instituto para el cual presta sus servicios, la citada implicada exhibió documentos que no cuentan con sustento académico.

Sirve de sustento a lo referido el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el registro 2003389, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: Libro XIX, Abril de 2013 Tomo 3, Materia: Administrativa, Tesis: I.9o.A.14 A (10a.), Página: 2280, cuyo rubro y texto refiere:

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CUANDO LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS EN QUE SE SUSTENTE NO SE DETALLEN A MANERA DE CATÁLOGO EN ALGÚN ORDENAMIENTO DE CARÁCTER GENERAL, DEBE ATENDERSE AL ESPÍRITU DEL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El hecho de que el cúmulo de las obligaciones o atribuciones inherentes al cargo de determinado servidor público no se detalle a manera de catálogo en algún ordenamiento de carácter general (ley, reglamento, decreto, circular o manual), es insuficiente para eximirlo de responsabilidad administrativa cuando ésta se sustente en su incumplimiento, **pues resulta materialmente imposible emitir una norma general que contenga todos los deberes que le correspondan, pues existen casos en que éstos no necesitan especificarse detalladamente en normas generales**, toda vez que son inherentes a su actividad, es decir, son consecuencia legal y necesaria de la función que realizan, por lo que en esos casos debe atenderse al espíritu del **artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, que establece los principios que todo servidor público debe cumplir, entre otros, lealtad, **honradez** y eficiencia en el desempeño del empleo, cargo o comisión, los cuales han de ser conforme a todo lo inherente al cargo encomendado. Considerar lo contrario implicaría que sería suficiente que el ordenamiento jurídico relativo a determinada dependencia del Ejecutivo no previera concreta y expresamente las obligaciones y deberes que a cada servidor público razonablemente le corresponden, para dejar impunes prácticas contrarias a los valores y cualidades que orientan a la administración pública y garantizan el buen servicio, bajo el principio unitario de coherencia entre la actuación del servidor público y los valores constitucionales conducentes, sobre la base correlativa de deberes generales y exigibilidad activa de su responsabilidad.

Asimismo, el registro: 165147, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Febrero de 2010, Materia: Administrativa, Tesis: I.7o.A. J/52, página 2742, cuyo rubro y texto señala:

SERVIDORES PÚBLICOS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SUS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES NO ESTÉN EXPRESAMENTE CONTEMPLADAS EN UNA NORMA GENERAL, ES INSUFICIENTE PARA EXIMIRLOS DE RESPONSABILIDAD. El artículo **113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** dispone que las leyes de responsabilidades de los servidores públicos tienen por objeto salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos y comisiones de los empleados del gobierno; principios que están cargados de un alto valor moral, al que aspiran los empleados del gobierno y entes del Estado. Por su parte, el artículo **47, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos** (de igual redacción al diverso numeral **8o., fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos**, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil dos), dispone como obligación a los empleados del gobierno cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la



suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; así, la circunstancia que el servicio encomendado, entendido como el cúmulo de obligaciones o atribuciones inherentes al cargo, no se encuentre detallado en forma de catálogo en alguna ley, reglamento, decreto, circular o norma de carácter general, es insuficiente para eximirlos de responsabilidad, pues resulta materialmente imposible emitir una norma general por cada rango, nivel o escalafón que exista en los tres poderes del gobierno. Por tanto, ante la inexistencia de una disposición normativa que especifique cuáles son las atribuciones de un servidor público, la autoridad administrativa y, en su caso, la jurisdiccional, deberá valorar los elementos de prueba allegados al asunto, para así concluir si determinada conducta o actuación se encuentra dentro de las facultades encomendadas al servidor público investigado o sancionado, fundando y motivando su determinación.

En el caso que nos ocupa, la implicada tenía pleno conocimiento de los principios de legalidad, honradez y lealtad que debía cumplir en su calidad de servidor público adscrita al Instituto de Salud del Estado de México, consecuentemente, debía conducirse con apego a los mismos, contrario a ello, y abusando de la buena fe del Instituto de Salud del Estado de México, exhibió documentos que no fueron expedidos a su favor y que la ostentan como Enfermera General Obstetra, para que los mismos fueran agregados a su expediente personal.

- c) Por cuanto hace a **las condiciones socioeconómicas de la infractora** que alude la **fracción III** del referido artículo 137 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en relación con el **inciso c)** del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, debe decirse que de las constancias que obran en autos se advierte que la servidor público cuenta con un sueldo mensual de \$14,783 (catorce mil setecientos ochenta y tres pesos moneda nacional) aproximados, situándose en un estado socio-económico que le permite satisfacer sus necesidades básicas, lo cual la ubica en un [REDACTED] aunado a ello, debe considerarse que al percibir un sueldo por parte del Instituto de Salud del Estado de México, debió y debe cumplir con los principios, obligaciones y deberes que emanan del servicio público y suprimir la práctica de acciones u omisiones que contravinieran y contravengan el servicio público y quebranten las disposiciones jurídicas que se relacionan con el servicio público, lo cual es evidente que no realizó, lo que constituye un agravante para determinar la sanción impuesta a la servidor público, en razón que con motivo de la percepción de sueldo por parte del Instituto de Salud del Estado de México, debe cumplir con los principios inherentes al servicio público encomendado.
- d) Respecto a **la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones**, circunstancia dispuesta en la **fracción IV** del multicitado artículo 137 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en relación con el **inciso d)** correspondiente a **antecedentes de imposición de sanciones y posible reincidencia del servidor público en el incumplimiento de obligaciones de la misma naturaleza**, del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, el antecedente de imposición de sanciones no se actualiza en razón de que en el Sistema Integral de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, que se lleva en esta Contraloría Interna, no existe registro de sanción administrativas alguna impuesta por este Órgano de Control Interno en contra de la **C. Juana Lourdes Barrera Morales**, sin embargo, en el desarrollo del presente resolutivo, se acredita la infracción de la implicada en el servicio público adscrita al Instituto de Salud del Estado de México; por ende, y con la finalidad de evitar posteriores faltas de la **C. Juana Lourdes Barrera Morales**, es que esta autoridad administrativa determina la imposición de la sanción correspondiente, en razón de que la conducta de la servidor público implicada puede tener trascendencia en la prestación del servicio público con la población usuaria, ante el uso de documentos presuntamente apócrifo y además necesariamente conduce a establecer una afectación real o potencial al bien jurídico tutelado, no sólo porque cuando con esa elaboración o acto material de alteración, falsificación o uso de documento apócrifo, concurren además, el propósito de obtener algún provecho para sí o para otro o causar un perjuicio en contra de terceros y que la falsificación

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Expediente: **CI/ISEM/OF/020/2017.**

sea sin el consentimiento del tercero potencialmente afectado, que es la certeza y veracidad que corresponde a la expedición de documentos, de modo que, resulta obvio que todo aquel que use un documento a sabiendas de su falsedad o apócrifidad, denota la intención de obtener algún tipo de beneficio y la potencial transgresión, por razón del estado de peligro que produce, al bien jurídico tutelado, ello en función de su naturaleza que presupone el uso consciente de un documento apócrifo, de manera que se presumen las peculiaridades de una falsificación.

- e) **Finalmente, por lo que hace a la circunstancia correspondiente al monto del beneficio, daño o perjuicio económico, derivado del incumplimiento de obligaciones** que establece la **fracción V** del artículo 137 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en relación con el **inciso e)** del artículo 49 de la citada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en el caso que nos ocupa no existe; sin embargo, ello no implica la desacreditación de la responsabilidad administrativa en que incurrió la **C. Juana Lourdes Barrera Morales**, en consecuencia, la imposición de la sanción correspondiente.

Por lo anterior y con base en los razonamientos vertidos en el presente considerando, se determina que la **C. Juana Lourdes Barrera Morales**, es administrativamente responsable de la irregularidad atribuida en el oficio citatorio 217B11000/05419/2017.

Concluyentemente esta autoridad administrativa, con fundamento en los artículos 43 y 49 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, determina procedente aplicar la destitución del empleo, cargo o comisión que actualmente desempeña en el Instituto de Salud de Estado de México; asimismo, al haberse acreditado la infracción a los principios de legalidad, honradez y lealtad que rigen el servicio público, ~~por parte de la~~ **C. Juana Lourdes Barrera Morales**, se determina procedente aplicar además la sanción de inhabilitación como medida idónea de erradicación de la conducta sancionada, por lo que en términos de los artículos 43 y 49 fracción V de la invocada Ley de Responsabilidades, que estipula que dicha sanción deberá oscilar entre un periodo no menor de seis meses como mínimo ni mayor a ocho años como máximo, siendo el término medio aritmético el correspondiente a cuatro años tres meses, considerando las circunstancias generales y particulares expuestas en el presente instrumento jurídico, por lo que la sanción deberá situarse entre la mínima y media aritmética; en consecuencia, esta autoridad administrativa considera procedente aplicar la **inhabilitación por el término de tres años** para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, lo anterior, pues no puede estimarse la aplicación del periodo mínimo atendiendo a la trascendencia y dolo con que se condujo la implicada; sin embargo, tampoco se considera la media aritmética al estimarse excesiva.

En este tenor, se determina procedente imponer como sanción administrativa disciplinaria a la **C. Juana Lourdes Barrera Morales**, la consistente en la **destitución** del empleo, cargo o comisión que desempeña actualmente en el Instituto de Salud del Estado de México, así como la **inhabilitación por el término de tres años** para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, derivado de la responsabilidad administrativa en que incurrió y que quedó precisada en la presente resolución.

- V. Por lo que hace a la responsabilidad administrativa atribuida al **C. Ofelia Margarita Hernández Peña**, en el escrito glosado a fojas 87 a 90 de los autos, realizó diversas manifestaciones de defensa, las cuales serán analizadas en el presente considerando, por lo que en obvio de repeticiones innecesarias se omite su transcripción.

En la etapa de pruebas, la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña** ofreció las siguientes: *"...1. Todas y cada una de las constancias que obran agregadas al expediente de cuenta, de las que no se advierte elemento alguno que acredite de manera fehaciente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que supuestamente la suscrita exhibió o entregó la*



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Expediente: CI/ISEM/OF/020/2017.

cédula y título anteriormente señalados. 2. Se ofrece de igual forma la presuncional Legal y Humana, prueba que se ofrece tan solo en aquello que beneficie a los intereses de la que suscribe...".

En la etapa de alegatos la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña** manifestó: "Se reitera que la que suscribe no incurrió en irregularidad alguna, conforme a los hechos narrados por la autoridad en el oficio, ya que nunca exhibí copia del título y cédula profesional número [REDACTED]. Asimismo, se manifiesta que el oficio por el cual se me cita a la presente audiencia de ley está indebidamente fundado y motivado, toda vez que en el mismo no se precisa que obligación de las que establece el artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios se incumplió con la supuesta conducta que se me imputa, por lo que esta autoridad deberá resolver el presente procedimiento, absolviéndome de todas y cada una de las imputaciones que se me atribuyen en el citatorio de mérito...".

Por lo anterior, se procede al análisis y valoración de la instrumental de actuaciones que integra el expediente que se resuelve, en relación con las manifestaciones, pruebas y alegatos vertidos por la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña**, conforme a las reglas de la lógica y la sana crítica en términos de los artículos 95, 100 y 105 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, toda vez que en el citatorio a garantía de audiencia, se atribuyó a la implicada que en su calidad de servidor público adscrita al Instituto de Salud del Estado de México, exhibió copia del Título y cédula profesional con folio [REDACTED] que la ostentan como Enfermera General Obstetra, supuestamente expedidos por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, respectivamente, aun cuando dichos documentos no fueron expedidos a su favor, como se advierte del oficio DGAE/DCyCD/1159/2017, visible a foja 60 de los autos, suscrito por el Director General de Administración Escolar de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que informó: "...En atención a su oficio No. 217B11000/02119/2017... mediante el cual solicita la validación de dos títulos de Enfermera General Obstetra emitidos supuestamente por la UNAM a las CC. **OFELIA MARGARITA HERNÁNDEZ PEÑA**, realizada una búsqueda en el Archivo General y en el Sistema Integral de Administración Escolar **no se localizaron antecedentes de las referidas personas como alumnas de esta Universidad** o de alguna Institución incorporada a ésta..."; y DGP/DJ/1690/2017, visible a foja 58 de los autos, suscrito por la Directora de Autorización y Registro Profesional de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en la que señaló: "...En atención a su oficio número 217B11203/353/2017... mediante el cual solicita se informe si esta Dirección de Profesiones cuenta con registro a favor de los C.C... **OFELIA MARGARITA HERNÁNDEZ PEÑA**, bajo el número de cédula profesional [REDACTED] misma que supuestamente le acredita para ejercer como Enfermera General Obstetra... después de haber realizado una búsqueda en los archivos de esta Unidad Administrativa, **NO SE LOCALIZÓ registro profesional a favor de los C.C... OFELIA MARGARITA HERNÁNDEZ PEÑA**, bajo el número de cédula profesional [REDACTED] misma que supuestamente le acredita para ejercer como Enfermera General Obstetra. Asimismo se comenta que los números de cédula profesional... [REDACTED] corresponden a otras personas... (...) las copias imples que anexa de las cédula profesional números... [REDACTED] mismas que acreditan para ejercer como Enfermera General Obstetra, a favor de los C.C... **OFELIA MARGARITA HERNÁNDEZ PEÑA**, supuestamente expedidas por esta Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, la misma **se desconoce** y por lo tanto, se presume **apócrifa**...", es decir, en la Universidad Nacional Autónoma de México, no existen antecedentes de que la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña** haya sido alumna de la citada Universidad o bien de alguna institución incorporada; asimismo en el Registro Nacional de Profesionistas no existe antecedente profesional de la servidor público como Enfermera General Obstetra y el número de la cédula profesional [REDACTED] exhibido corresponde a otra persona, por lo que el título que exhibió no cuenta con sustento académico y la cédula que presentó corresponde a otra persona, no obstante, fueron exhibidos por la servidor público, con el firme propósito de que se agregaran a su expediente personal; faltando con su conducta a los principios de legalidad, honradez y lealtad, que rigen la prestación del servicio público, ya que abusando de la buena fe del Instituto de Salud del Estado de México, se ostenta con una profesión de Enfermera General Obstetra sin que la documentación exhibida por la implicada tenga sustento académico.

Cabe destacar que el dieciséis de octubre de mil novecientos ochenta, la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña** ingresó al Instituto de Salud del Estado de México, a efecto de prestar servicio público, tal como se corrobora con el oficio 217B32100/07506/2017, visible a fojas 14 a 15 de los autos, suscrito por el Subdirector de Recursos Humanos del Instituto de Salud del Estado de México, de la que se observa: "...**HERNÁNDEZ PEÑA OFELIA MARGARITA**... Ingresó el 16 de octubre de



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Expediente: **CI/ISEM/OF/020/2017.**

1980...", adquiriendo así la calidad de servidor público, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios que cita: **"Artículo 2.** Son sujetos de esta Ley, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza en la administración pública estatal o municipal, en sus organismos auxiliares y fideicomisos públicos, y en los poderes Legislativo, Judicial del Estado y en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México".

En ese tenor, y de la inspección 041-0188-2017 denominada al perfil académico del personal adscrito a la Jurisdicción Sanitaria Ecatepec del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del uno al diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, realizada por la Subdirección de Auditoría a Salud y Regulación Sanitaria de esta Contraloría Interna, detectó entre otros, que la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña** tiene agregada a su expediente personal una cédula profesional cuyos datos no corresponden a los asentados en el Registro Nacional de Profesionistas, tal como fue precisado en el oficio 217B11300/028/2017, visible a foja 2 de los autos, documental que al ser adminiculada y concatenada con la impresión del resultado de la consulta realizada por el personal adscrito a este Órgano de Control Interno en el vínculo de la página electrónica (<https://www.gob.mx/>)>Inicio (<http://www.gob.mx/sep>) > Cédula Profesional del Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, visible a fojas 10 y 11 de los autos, del que se advierte: "...DATOS DE CONSULTA Nombre(s)*:

OFELIA MARGARITA Primer apellido*: **HERNÁNDEZ** Segundo apellido **PEÑA...**, y "...RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA Cédula [REDACTED] Nombre [REDACTED] Primer Apellido **HERNÁNDEZ** Segundo apellido **PEÑA...** [REDACTED] Nombre [REDACTED] Primer Apellido **HERNÁNDEZ** Segundo apellido **PENA...** [REDACTED] Nombre [REDACTED] Primer Apellido **HERNÁNDEZ** Segundo apellido **PEÑA...** [REDACTED] Nombre [REDACTED] Primer Apellido **HERNÁNDEZ** Segundo apellido **PENA...**" mientras que a foja 12 de los autos, se observa: "...DETALLE DEL REGISTRO *Número de Cédula [REDACTED] Nombre [REDACTED] Y

AUDITOR... Año de expedición: **1992** Institución: **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS...**, lo cual, al ser adminiculado y relacionado con el oficio DGAE/DCyCD/1159/2017, visible a foja 60 de los autos, suscrito por el Director General de Administración Escolar de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que informó: "...En atención a su oficio No. 217B11000/02119/2017... mediante el cual solicita la validación de dos títulos de Enfermera General Obstetra emitidos supuestamente por la UNAM a las CC. **OFELIA MARGARITA HERNÁNDEZ PEÑA...** realizada una búsqueda en el Archivo General y en el Sistema Integral de Administración Escolar **no se localizaron antecedentes de las referidas personas como alumnas de esta Universidad** o de alguna Institución incorporada a ésta...", así como el oficio DGP/DJ/1690/2017, visible a foja 58 de los autos, suscrito por la Directora de Autorización y Registro Profesional de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en la que señaló: "...En atención a su oficio número 217B11203/353/2017... mediante el cual solicita se informe si esta Dirección de Profesiones cuenta con registro a favor de los C.C... **OFELIA MARGARITA HERNÁNDEZ PEÑA**, bajo el número de cédula profesional [REDACTED] misma que supuestamente le acredita para ejercer como Enfermera General Obstetra... después de haber realizado una búsqueda en los archivos de esta Unidad Administrativa, **NO SE LOCALIZÓ registro profesional a favor de los C.C... OFELIA MARGARITA HERNÁNDEZ PEÑA**, bajo el número de cédula profesional [REDACTED] misma que supuestamente le acredita para ejercer como Enfermera General Obstetra. Asimismo se comenta que los números de cédula profesional... [REDACTED] corresponden a otras personas... (...) las copias ímples que anexa de las cédula profesional números... [REDACTED] mismas que acreditan para ejercer como Enfermera General Obstetra, a favor de los C.C... **OFELIA MARGARITA HERNÁNDEZ PEÑA**, supuestamente expedidas por esta Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, la misma **se desconoce** y por lo tanto, se presume **apócrifa...**", documentales que al ser analizadas y valoradas en su conjunto de conformidad con las reglas de la lógica y la sana crítica en términos de los artículos 95, 100 y 105 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, son suficientes para demostrar que la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña** faltó a los principios de legalidad, honradez y lealtad que rigen la prestación del servicio público, toda vez que de la consulta a las páginas electrónicas en cita, se advierte que la cédula profesional [REDACTED] que obra en el expediente de la citada servidor público corresponde a otra persona.

Consecuentemente, la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña** en su calidad de servidor público adscrita al Instituto de Salud del Estado de México, contravino los principios de legalidad, honradez y lealtad que rigen el servicio público, contemplados en el artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.



“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante”.

Expediente: **CI/ISEM/OF/020/2017**.

Lo anterior es así, toda vez que las manifestaciones de defensa de la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña** vertidas en el escrito glosado a fojas 87 a 90 de los autos, en los que en esencia señaló la supuesta falta de circunstancias de modo, tiempo y lugar, respecto a la conducta que le fue atribuida, arguyendo así una supuesta falta de fundamentación y motivación, al respecto, debe decirse que si bien es cierto, en el expediente que se resuelve, no existe la certeza de la fecha en que la ahora responsable exhibió la copia de título y cédula profesional con folio [REDACTED] que la ostentan como Enfermera General Obstetra, dicha circunstancia es insuficiente para desestimar su responsabilidad administrativa y en su caso eximirla de la sanción que corresponda, pues en el caso concreto, no debe perderse de vista que atendiendo a la buena fe con que se conduce el Instituto de Salud del Estado de México, y mediante el cual deposita su confianza en los servidores públicos adscritos a este, que de ninguna manera lo llevan a dudar de las aseveraciones ni muchos menos de los documentos que en su caso estos exhiban, más aún cuando los mismos cuentan con indicios de ser públicos; luego entonces, resulta ilógico que atendiendo a dicho principio, el Instituto de Salud del Estado de México, parta en todo momento de una actitud de sospecha respecto a sus subordinados en los cuales deposita su confianza, esperando del mismo modo, que la misma sea recíproca, en dicha tesitura, no resulta coherente que por cada trámite que realice la institución tenga que corroborar la autenticidad de los datos y documentos que su personal exhiba para así estar en posibilidad de determinar en su caso el momento exacto en el que algún servidor público incurra en alguna conducta como la que ahora nos ocupa, máxime que no es el Instituto de Salud del Estado de México la institución facultada para determinar dicha autenticidad, sino que para el caso de advertir alguna inconsistencia, ésta debe hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes, luego entonces, la circunstancia de tiempo, en el caso concreto, se subsana al momento mismo en que esta Contraloría Interna tuvo conocimiento de la presunta conducta irregular, a través de la inspección 041-0188-2017 denominada al perfil académico del personal adscrito a la Jurisdicción Sanitaria Ecatepec del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del uno al diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, realizada por la Subdirección de Auditoría a Salud y Regulación Sanitaria, en la que se detectó que la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña** tiene agregada a su expediente personal una cédula profesional cuyos datos no corresponden a los asentados en el Registro Nacional de Profesionistas; en dicha tesitura, si bien es cierto la circunstancia de tiempo es relevante en cualquier asunto, no menos cierto es que la misma adquiere dicha importancia al relacionarse directamente con la prescripción, es decir, con el derecho del gobernante de hacer valer en su favor la prescripción de la conducta irregular por el simple transcurso del tiempo; sin embargo, en el asunto que se resuelve, dicha causal de improcedencia es, valga la redundancia, improcedente, ello, considerando que la conducta atribuida a la ahora responsable debe entenderse como un todo, y no así de manera aislada, esto es, la irregularidad misma, consistente en la exhibición de los documentos que no fueron exhibidos a su favor (título y cédula profesional con folio [REDACTED] que la ostentan como Enfermera General Obstetra), en estrecha relación con los efectos de dicha acción, esto es, el abusar de la buena fe del Instituto de Salud del Estado de México al ostentarse con una profesión de la que carece, exhibiendo para dicho objeto copia de título y cédula profesional con folio [REDACTED] que la ostentan como Enfermera General Obstetra, y que obran agregados a su expediente personal, documentales con las cuales pretendió acreditar su calidad de profesionista.

Así las cosas, se reitera que en el caso concreto no resulta aplicable la prescripción de la facultad sancionadora de esta autoridad administrativa, ello, toda vez que la conducta externada por la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña**, adquiere el carácter de continua, la cual si bien inició con la exhibición de la copia de título y cédula profesional con folio [REDACTED] dicha conducta no se consumó en el momento mismo de la exhibición (para el cual sería indispensable acreditar la circunstancia de tiempo), sino que sus efectos se prolongaron y se continúan prolongando en el tiempo, esto es, desde su presentación hasta que esta autoridad administrativa tuvo conocimiento de que los mismos no fueron expedidos a favor de la ahora responsable, máxime que al encontrarse aún en su expediente personal, continúan otorgando y acreditando a la implicada con una



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Expediente: **CI/ISEM/OF/020/2017.**

profesión de Enfermera General Obstetra con la que no cuenta, evidenciándose que la implicada abusó de la buena fe con que se conduce el Instituto de Salud del Estado de México, al exhibir documentos aparentemente verídicos.

Sirve de sustento a lo anterior, la tesis aislada número I.5o.C.47-C, visible en la página 1696, Libro XXII, de agosto 2013, de los Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra señala:

***PRINCIPIO CONTRACTUAL DE BUENA FE. EL GENERAR UNA APARIENCIA JURÍDICA ATENTA EN SU CONTRA.** Se falta a la buena fe cuando se realizan uno o varios actos para beneficiarse, directa o indirectamente, de modo intencional, con la creación de una apariencia jurídica, que a la postre defrauda la confianza depositada por otros sujetos, en tanto con dicho proceder se contradice una inicial manifestación de voluntad, que generó expectativas de derechos, que no se cumplen hasta su normal culminación; lo que a su vez atenta contra la seguridad jurídica que debe existir en todo ámbito para el eficaz desarrollo de las relaciones de derecho; de ahí que no puede desconocerse la existencia de ciertas situaciones de hecho, revestidas de una apariencia de solidez y rectitud.*

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 740/2010. Spectrasite Communications, Inc. 15 de diciembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca.

Ahora bien, por lo que hace a la circunstancia de modo, la misma que quedado plenamente acreditada, esto, al señalarse que la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña** exhibió copia de título y cédula profesional con folio [REDACTED] que la ostentan como Enfermera General Obstetra, con el firme propósito de que se agregaran a su expediente personal, tanto es así que la Subdirección de Recursos Humanos del Instituto de Salud del Estado de México, a través de oficio 217B32100/07506/2017 remitió el expediente personal de la implicada, el cual se integró con la documentación que dicha servidor público exhibió para su integración en diversos momentos de su trayectoria laboral, circunstancia que conlleva en sí mismo el modo.

Finalmente, por lo que hace a la circunstancia de lugar, está igualmente acreditada, ya que basta retomar la irregularidad atribuida, en la cual se señaló que exhibió los multicitados documentos con el firme propósito de que se agregaran a su expediente personal, el cual se encuentra resguardado en la Subdirección de Recursos Humanos del Instituto de Salud del Estado de México, luego entonces, atendiendo a las reglas de la lógica y la sana crítica, es posible arribar a la presunción de que los multicitados documentos fueron exhibidos ante dicha área, independientemente de la sede que en su momento pudiera tener, ello considerando la infinidad de áreas con que cuenta el Instituto en las diversas unidades; sin embargo, considerando que la responsable ingresó a laborar desde mil novecientos ochenta a la Jurisdicción Sanitaria Ecatepec del Instituto de Salud, ello nos lleva a establecer que para el caso de que la implicada no exhibiera los documentos que se cuestionan en oficinas centrales (Subdirección de Recursos Humanos), debió exhibirlos en el área de recursos humanos de dicha jurisdicción, y por conducto de éstas se hicieron llegar a la citada Subdirección, al ser el área facultada para recabar y en su caso resguardar los expedientes personales de los servidores públicos adscritos al Instituto de Salud del Estado de México.

Por lo que hace a los argumentos de la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña**, consistente en el supuesto desconocimiento de los documentos y negativa de haberlos exhibido, argumentos que al ser analizados con estricto apego a las reglas de la lógica y la sana crítica, contenidas en los artículos 95 y 105 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, son insuficientes para desestimar la responsabilidad administrativa que le fue atribuida en el citatorio a garantía de audiencia 217B11000/05420/2017, ya que si bien la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña** expresa una negativa lisa y llana de haber incurrido en la irregularidad que se le atribuye, también es, que de los autos del expediente que

se resuelve, se advierten pruebas documentales que adminiculadas entre sí, permiten a este Órgano de Control Interno arribar a la conclusión de que la implicada incumplió los principios de legalidad, honradez y lealtad que rigen el servicio público, toda vez que en el expediente personal que se encuentra en los archivos del Instituto de Salud del Estado de México, obra copia de Título y cédula profesional con folio [REDACTED] que la acreditan como Enfermera General Obstetra, sin que dichas documentales tengan sustento académico, de conformidad con los oficios signados por el Director General de Administración Escolar de la Universidad Nacional Autónoma de México y Directora de Autorización y Registro Profesional de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, agregados a fojas 60 y 45 de los autos respectivamente, de los cuales se omite su transcripción.

En ese orden de ideas, del expediente personal de la implicada, remitido por la Subdirección de Recursos Humanos, que obra en los archivos del Instituto de Salud del Estado de México, se advierte las siguientes documentales:

1. Copia de cédula profesional visible a foja 42 de los autos, de la que se advierte: **"...SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES [REDACTED] EN VIRTUD DE QUE OFELIA MARGARITA HERNÁNDEZ PEÑA CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PROFESIONES Y SU REGLAMENTO SE LE EXPIDE LA PRESENTE CÉDULA CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE *ENFERMERA GENERAL OBSTETRA*..."**
2. Copia de Título de Enfermera General Obstetra, visible a foja 43 de los autos, de la que se advierte: **"...La Universidad Nacional Autónoma de México otorga a C. Ofelia Margarita Hernández Peña el título de Enfermera General Obstetra... 12 de marzo de 1994..."**

Documentos que valorados en términos de la lógica y la sana crítica de conformidad con los artículos 95, 100 y 105 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, permiten a esta autoridad administrativa asumir la plena convicción de que la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña** se ostenta con título y cédula profesional con folio [REDACTED] que la acreditan como Enfermera General Obstetra, documentales que fueron exhibidas por la ahora responsable con el firme propósito de que fueran agregadas a su expediente personal, mismas que exhibió aun cuando no cuentan con sustento académico, toda vez que al ser analizadas en contraposición a los oficios DGAE/DCyCD/1159/2017 visible a foja 60 de los autos, suscrito por el Director General de Administración Escolar de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que informó: **"...En atención a su oficio No. 217B11000/02119/2017... mediante el cual solicita la validación de dos títulos de Enfermera General Obstetra emitidos supuestamente por la UNAM a las CC. OFELIA MARGARITA HERNÁNDEZ PEÑA... realizada una búsqueda en el Archivo General y en el Sistema Integral de Administración Escolar no se localizaron antecedentes de las referidas personas como alumnas de esta Universidad o de alguna Institución incorporada a ésta..."**; y DGP/DJ/1690/2017, visible a foja 58 de los autos, suscrito por la Directora de Autorización y Registro Profesional de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en la que señaló: **"...En atención a su oficio número 217B11203/353/2017... mediante el cual solicita se informe si esta Dirección de Profesiones cuenta con registro a favor de los C.C... OFELIA MARGARITA HERNÁNDEZ PEÑA, bajo el número de cédula profesional [REDACTED] misma que supuestamente le acredita para ejercer como Enfermera General Obstetra... después de haber realizado una búsqueda en los archivos de esta Unidad Administrativa, NO SE LOCALIZÓ registro profesional a favor de los C.C... OFELIA MARGARITA HERNÁNDEZ PEÑA, bajo el número de cédula profesional [REDACTED] misma que supuestamente le acredita para ejercer como Enfermera General Obstetra. Asimismo se comenta que los números de cédula profesional... [REDACTED] corresponden a otras personas... (...) las copias imples que anexa de las cédula profesional números... [REDACTED] mismas que acreditan para ejercer como Enfermera General Obstetra, a favor de los C.C... OFELIA MARGARITA HERNÁNDEZ PEÑA, supuestamente expedidas por esta Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, la misma se desconoce y por lo tanto, se presume apócrifa..."**; adminiculados con impresión del resultado obtenido de la consulta realizada por el personal adscrito a este Órgano de Control Interno en el vínculo de la página electrónica (<https://www.gob.mx/>)>Inicio (<http://www.gob.mx/sep>)>Cedula Profesional del Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; visible a fojas 10 y 11 de los autos, del que se advierte: **"...DATOS DE CONSULTA Nombre(s): OFELIA MARGARITA Primer apellido*: HERNÁNDEZ Segundo apellido PEÑA..."**, y **"...RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA Cédula [REDACTED] Nombre [REDACTED] Primer Apellido HERNÁNDEZ"**



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Expediente: CI/ISEM/OF/020/2017.

Segundo apellido PEÑA... Cédula [REDACTED] Nombre [REDACTED] Primer Apellido
HERNÁNDEZ Segundo apellido PEÑA... Cédula [REDACTED] Nombre [REDACTED] Primer
Apellido HERNÁNDEZ Segundo apellido PEÑA... Cédula [REDACTED] Nombre [REDACTED] Primer
Apellido HERNÁNDEZ Segundo apellido PEÑA... y foja 12 de los autos, del que se
advierte: "...DETALLE DEL REGISTRO *Número de Cédula [REDACTED] Nombre [REDACTED]
[REDACTED] Profesión: [REDACTED]...

Año de expedición: 1992 Institución: **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS...**, constituyen evidencias probatorias idóneas y suficientes, las cuales permiten a esta Contraloría Interna emitir un juicio debidamente fundado y motivado, respecto a la responsabilidad administrativa en que incurrió la servidor público implicada, al haberse acreditado fehacientemente que, exhibió copia de Título y cédula profesional con folio [REDACTED] que la ostentan como Enfermera General Obstetra, supuestamente expedidos por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, respectivamente, aun cuando dichos documentos no fueron expedidos a su favor y que obran en su expediente personal resguardado en la Subdirección de Recursos Humanos del Instituto de Salud del Estado de México, tal como se corrobora con el oficio 217B32100/07506/2017, visible a fojas 14 a 15 de los autos, lo anterior, ya que como se advierte del oficio DGAE/DCyCD/1159/2017, visible a foja 60 de los autos, suscrito por el Director General de Administración Escolar de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que informó: "...En atención a su oficio No. 217B11000/02119/2017... mediante el cual solicita la validación de dos títulos de Enfermera General Obstetra emitidos supuestamente por la UNAM a las CC. **OFELIA MARGARITA HERNÁNDEZ PEÑA...** realizada una búsqueda en el Archivo General y en el Sistema Integral de Administración Escolar **no se localizaron antecedentes de las referidas personas como alumnas de esta Universidad** o de alguna Institución incorporada a ésta...", en la Universidad Nacional Autónoma de México, no existen antecedentes de la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña**, como alumna de dicha Institución o de alguna incorporada a la citada Universidad; asimismo, en el Sistema Nacional del Registro de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública no existe antecedente profesional de la implicada como Enfermera General Obstetra, y el número de cédula profesional con folio [REDACTED] corresponde a otra persona, tal como lo informó la Directora de Autorización y Registro Profesional de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en el oficio DGP/DJ/1690/2017, visible a foja 58 de los autos, en el que señaló: "...En atención a su oficio número 217B11203/353/2017... mediante el cual solicita se informe si esta Dirección de Profesiones cuenta con registro a favor de los C.C... **OFELIA MARGARITA HERNÁNDEZ PEÑA**, bajo el número de cédula profesional [REDACTED], misma que supuestamente le acredita para ejercer como Enfermera General Obstetra... después de haber realizado una búsqueda en los archivos de esta Unidad Administrativa, **NO SE LOCALIZÓ registro profesional a favor de los C.C... OFELIA MARGARITA HERNÁNDEZ PEÑA**, bajo el número de cédula profesional [REDACTED], misma que supuestamente le acredita para ejercer como Enfermera General Obstetra. Asimismo se comenta que los números de cédula profesional... [REDACTED] corresponden a otras personas... (...) las copias imples que anexa de las cédula profesional números... [REDACTED] mismas que acreditan para ejercer como Enfermera General Obstetra, a favor de los C.C... **OFELIA MARGARITA HERNÁNDEZ PEÑA**, supuestamente expedidas por esta Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, la misma **se desconoce** y por lo tanto, se presume **apócrifa...**", por lo que el título y cédula profesional exhibidos por la implicada no cuentan con sustento académico, no obstante la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña**, los exhibió con el firme propósito de que se agregaran a su expediente personal; faltando con su conducta a los principios de legalidad, honradez y lealtad, que rigen la prestación del servicio público, ya que abusando de la buena fe del Instituto de Salud del Estado de México, se ostenta con una profesión de Enfermera General Obstetra sin que la documentación exhibida por la implicado tenga sustento académico.

Es por lo anterior, que las manifestaciones de la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña** resultan inoperantes, al argüir que desde su ingreso al Instituto de Salud del Estado de México en mil novecientos ochenta y uno se ha desempeñado como Técnico en Atención Primaria a la Salud, situación similar acontece con las manifestaciones de la servidor público, en las que arguye que no existe impulso o interés alguno que orillaran a la implicada a exhibir las documentales en cuestión, pretendiendo con dicho argumento soslayar su responsabilidad, perdiendo de vista que, esta Contraloría Interna ni muchos menos el Instituto de Salud del Estado de México, tienen algún interés directo en que sus subordinados cuenten con algún grado o especialidad, y si bien, de acuerdo al Catálogo Sectorial de Puestos, todo servidor público debe cumplir algún perfil académico, lo cierto es



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Expediente: CI/ISEM/OF/020/2017.

que el Instituto únicamente se encarga de recabar la información correspondiente, a interés del presentante, pues será a su favor, que la información y documentación sea agregada a su expediente personal, de ahí el interés personal y directo que tiene el servidor público con la actualización constante de su expediente laboral, máxime que los autos se advierte a foja 55, la documental denominada Actualización de Datos del Trabajador, correspondiente a la servidor público que nos ocupa, en cuyo apartado correspondiente a Nivel Máximo de Estudios se aprecia: "...TÉCNICA PROFESIONAL... AÑOS CURSADOS... 3... CERTIFICADO... /... TÍTULO... /... NOMBRE DE LA CARRERA O ESPECIALIDAD... ENFERMERA GENERAL... NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN... UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO... CÉDULA PROFESIONAL..."; observándose al margen derecho la firma autógrafa de la servidor público implicada, documental que robustece la irregularidad que le fuera atribuida, resultando irrelevante los argumentos que intenta hacer valer en su favor, al aseverar que aun cuando suscribió dicha documental, no inscribió diversos datos, sin especificar a cuales se refiere, luego entonces, dichas manifestaciones son subjetivas al no encontrarse robustecidas con algún medio idóneo para ello, pues en el caso particular, si la garantista refirió la discrepancia en grafos, debió aportar elementos idóneos para acreditar dicha circunstancia, lo cual en el caso concreto no aconteció, en consecuencia la inoperancia de su argumento, máxime que al haber reconocido expresamente ante esta autoridad haber suscrito dicha documental, asentando su firma, ello lleva implícito la aceptación del contenido de la documental que nos ocupa.

Continuando con el análisis de los argumentos de defensa vertidos por la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña**, consistentes en el supuesto estado de indefensión que se le causa, al iniciarse procedimiento administrativo en su contra, siendo que se encuentra en un estatus de jubilable, circunstancia que resulta inoperante, considerando la actuación de oficio que debe cumplimentar en todo tiempo esta autoridad administrativa, una vez que tiene conocimiento de conductas irregulares, facultad que de ninguna manera es limitativa, ni establece excepciones a la regla, sino que basta que un servidor público incurra en alguna presunta irregularidad, independientemente del status, grado, nivel, etcétera con que cuenta, para ser sujeto del procedimiento administrativo correspondiente y en su caso de las sanciones aplicables.

Finalmente, por lo que hace a los argumentos de la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña**, en los que en esencia, arguye que en el citatorio a garantía de audiencia se omitió precisar la facción o fracciones, de entre las treinta y tres que establece el artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, aplicable al caso concreto, es decir, aquella que encuadre en la conducta que se le reprocha, por lo que la falta de dicha precisión incide en la citación de la obligación que debió cumplir o bien la abstención de algún acto o hecho; al respecto, dichos argumentos, al ser analizados y valorados de conformidad con las reglas de la lógica y la sana crítica contenidos en los artículos 95 y 105 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, son insuficientes para desestimar su responsabilidad administrativa, en razón que el hecho de que la conducta desplegada por la ahora responsable no se sustente a manera de catálogo en algún ordenamiento legal, entre ellos la Ley de Responsabilidades en cita (artículo 42), es insuficiente para eximirla de responsabilidad administrativa, ya que en dicho caso, la jurisprudencia ha establecido que deberá atenderse al espíritu del artículo 113 Constitucional.

Sirve de sustento a lo referido el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el registro 2003389, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: Libro XIX, Abril de 2013 Tomo 3, Materia: Administrativa, Tesis: I.9o.A.14 A (10a.), Página: 2280, cuyo rubro y texto refiere:

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CUANDO LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS EN QUE SE SUSTENTE NO SE DETALLEN A MANERA DE CATÁLOGO EN ALGÚN ORDENAMIENTO DE CARÁCTER GENERAL, DEBE ATENDERSE AL ESPÍRITU DEL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El hecho de que el cúmulo de las obligaciones o atribuciones inherentes al cargo

Página 25 de 37

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Expediente: CI/ISEM/OF/020/2017.

de determinado servidor público no se detalle a manera de catálogo en algún ordenamiento de carácter general (ley, reglamento, decreto, circular o manual), es insuficiente para eximirlo de responsabilidad administrativa cuando ésta se sustente en su incumplimiento, **pues resulta materialmente imposible emitir una norma general que contenga todos los deberes que le correspondan, pues existen casos en que éstos no necesitan especificarse detalladamente en normas generales**, toda vez que son inherentes a su actividad, es decir, son consecuencia legal y necesaria de la función que realizan, por lo que en esos casos debe atenderse al espíritu del **artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, que establece los principios que todo servidor público debe cumplir, entre otros, lealtad, **honradez** y eficiencia en el desempeño del empleo, cargo o comisión, los cuales han de ser conforme a todo lo inherente al cargo encomendado. Considerar lo contrario implicaría que sería suficiente que el ordenamiento jurídico relativo a determinada dependencia del Ejecutivo no previera concreta y expresamente las obligaciones y deberes que a cada servidor público razonablemente le corresponden, para dejar impunes prácticas contrarias a los valores y cualidades que orientan a la administración pública y garantizan el buen servicio, bajo el principio unitario de coherencia entre la actuación del servidor público y los valores constitucionales conducentes, sobre la base correlativa de deberes generales y exigibilidad activa de su responsabilidad.

Asimismo, el registro: 165147, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Febrero de 2010, Materia: Administrativa, Tesis: I.7o.A. J/52, página 2742, cuyo rubro y texto señala:

SERVIDORES PÚBLICOS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SUS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES NO ESTÉN EXPRESAMENTE CONTEMPLADAS EN UNA NORMA GENERAL, ES INSUFICIENTE PARA EXIMIRLOS DE RESPONSABILIDAD. El artículo **113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** dispone que las leyes de responsabilidades de los servidores públicos tienen por objeto salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos y comisiones de los empleados del gobierno; principios que están cargados de un alto valor moral, al que aspiran los empleados del gobierno y entes del Estado. Por su parte, el artículo **47, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos** (de igual redacción al diverso numeral **8o., fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos**, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil dos), dispone como obligación a los empleados del gobierno cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; así, la circunstancia que el servicio encomendado, entendido como el cúmulo de obligaciones o atribuciones inherentes al cargo, no se encuentre detallado en forma de catálogo en alguna ley, reglamento, decreto, circular o norma de carácter general, es insuficiente para eximirlos de responsabilidad, pues resulta materialmente imposible emitir una norma general por cada rango, nivel o escalafón que exista en los tres poderes del gobierno. Por tanto, ante la inexistencia de una disposición normativa que especifique cuáles son las atribuciones de un servidor público, la autoridad administrativa y, en su caso, la jurisdiccional, deberá valorar los elementos de prueba allegados al asunto, para así concluir si determinada conducta o actuación se encuentra dentro de las facultades encomendadas al servidor público investigado o sancionado, fundando y motivando su determinación.

En el caso que nos ocupa, la implicada tenía pleno conocimiento de los principios de legalidad, honradez y lealtad que debía cumplir en su calidad de servidor público adscrita al Instituto de Salud del Estado de México, consecuentemente, debía conducirse con apego a los mismos, contrario a ello, y abusando de la buena fe del Instituto de Salud del Estado de México, exhibió documentos que no fueron expedidos a su favor y que la ostentan como Enfermera General Obstetra, para que los mismos fueran agregados a su expediente personal.



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Expediente: CI/ISEM/OF/020/2017.

En dicha línea de ideas, debe decirse que los principios de mérito no pueden ser vulnerados únicamente por las conductas descritas en las fracciones del artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, como lo pretende hacer valer la responsable, sino que para acreditar la fuente obligacional basta con haberse especificado la forma en que la servidor público violento los principios de legalidad, honradez y lealtad que rigen el servicio público, considerar lo contrario implicaría dejar impunes prácticas contrarias a los valores y cualidades que orientan la administración pública, máxime que atendiendo a la naturaleza de la irregularidad, no debe perderse de vista que el servidor público se encuentra obligado a cumplir los principios de referencia no solamente en la prestación o ejercicio de la actividad, cargo o función que le ha sido encomendado, sino en todo su actuar dentro de la Administración Pública, por lo que sus conductas deben ser siempre apegadas los principios de mérito, pues la definición de aquellos no establece límites de actuación, sino que constituyen valores universales que el individuo debe observar en la totalidad de sus actuaciones u no solo en algunas de ellas.

Por lo anterior, y con base a la documentación que se cita en el presente considerando, se ha demostrado plenamente que en el expediente personal de la implicada, resguardado en la Subdirección de Recursos humanos del Instituto de Salud del Estado de México, se encuentran glosados copia de título y cédula profesional con folio [REDACTED] que la ostentan como Enfermera General Obstetra.

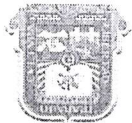
Lo expuesto, encuentra apoyo en la tesis aislada número I. 6o. T. 80 L, visible en la página 1131 del Libro 1, tomo II, de diciembre 2013, de los Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra señala:

FALTA DE PROBIDAD U HONRADEZ. LA CONSTITUYE LA EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS FALSOS AL PATRÓN, AUN CUANDO ÉSTOS NO HAYAN SIDO PRESENTADOS PARA OBTENER EL EMPLEO. La otrora Cuarta Sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia publicada en la página 111 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Quinta Parte, Volúmenes 133-138, de rubro: "PROBIDAD U HONRADEZ, FALTA DE CONCEPTO."; determinó que la falta de probidad u honradez consiste en no proceder rectamente en las funciones encomendadas, con mengua de rectitud de ánimo, o sea, apartarse de las obligaciones que se tienen a cargo procediendo en su contra, dejando de hacer lo que se tiene encomendado, o haciéndolo en contra; y que debe estimarse que no es necesario para que se integre la falta de probidad u honradez que exista un daño patrimonial o un lucro indebido, sino sólo que se observe una conducta ajena a un recto proceder. Atento a dicho concepto, la presentación de documentos falsos ante el patrón constituye una conducta que se aparta del recto proceder, motivo por el que se genera la falta de probidad del empleado, pues con su actitud revela falta de honradez en la relación laboral, aun cuando dichos documentos no hubieren sido presentados para obtener el empleo.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 951/2013. Eduardo Barrera Balanzario. 10 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Norma Nelia Figueroa Salmorán.

PRINCIPIO CONTRACTUAL DE BUENA FE. EL GENERAR UNA APARIENCIA JURÍDICA ATENTA EN SU CONTRA. Se falta a la buena fe cuando se realizan uno o varios actos para beneficiarse, directa o indirectamente, de modo intencional, con la creación de una apariencia jurídica, que a la postre defrauda la confianza depositada por otros sujetos, en tanto con dicho proceder se contradice una inicial manifestación de voluntad, que generó expectativas de derechos, que no se cumplen hasta su normal culminación; lo que a su vez atenta contra la seguridad jurídica que debe existir en todo ámbito para el eficaz desarrollo de las relaciones de derecho; de ahí que no puede desconocerse la existencia de ciertas situaciones de hecho, revestidas de una apariencia de solidez y rectitud.



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Expediente: CI/ISEM/OF/020/2017.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 740/2010. Spectrasite Communications, Inc. 15 de diciembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca.

PRINCIPIO DE BUENA FE CONTRACTUAL. IMPLICA UNA CONDUCTA DE COOPERACIÓN Y DE GENERACIÓN DE CONFIANZA ENTRE LOS CONTRATANTES. La buena fe exige en los sujetos una positiva actitud de cooperación y generación de confianza en las propias manifestaciones de voluntad, aun las emitidas a través de un sujeto diverso, que si bien tiene personalidad propia conforme a la regulación legal, ha cedido su aptitud para obligarse y decidir motu proprio, a quien por ser su creador ejerce un control sobre su persona; manteniéndose de ese modo la palabra empeñada, y trascendiendo dicho principio como un límite para el ejercicio de los derechos subjetivos involucrados. Así se estima porque todo derecho que la norma confiere a sus destinatarios, debe ejercitarse con moderación y prudencia, sobre todo cuando choca con intereses contrarios; de modo que la buena fe sólo opera en las relaciones intersubjetivas, en tanto pueda asumirse que uno de los sujetos no puede esperar del otro una conducta perjudicial a los intereses manifestados y concretados conforme a la propia ley, es decir, debe actuarse con una lealtad contractual.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 740/2010. Spectrasite Communications, Inc. 15 de diciembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca.

De lo anterior se desprende que con el actuar de la implicada, al haber exhibido diversas documentales que la ostentan con una profesión de Enfermera General Obstetra de la que carece, engañó dolosamente al Instituto de Salud del Estado de México, abusando de la confianza del Instituto de Salud, exhibiendo las multitudes documentales con la intención de que las mismas fueran agregadas a su expediente personal.

En la etapa de pruebas, la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña** ofreció en su favor la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, probanzas que al ser analizadas y valoradas de conformidad con los artículos 88, 89, 91, 92, 95, 104 y 105 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se les otorga el valor probatorio pretendido por la oferente, ya que contrario a beneficiar a su intereses le perjudican en razón que del expediente que se resuelve, se advierten elementos idóneos y suficientes para acreditar que la implicada exhibió copia de título y cédula profesional [REDACTED] que la acreditan como Enfermera General Obstetra, supuestamente expedidos por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Dirección General de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, con el firme propósito de que fueran agregados a su expediente personal, sin embargo, de la indagatoria realizada por esta Contraloría Interna, se advirtió que dichas documentales no fueron expedidas a favor de la implicada, por lo que al haber exhibido dichas documentales, la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña** con su conducta incumplió los principios de legalidad, honradez y lealtad que rigen el servicio público, entendiéndose por **legalidad**, el principio jurídico en virtud del cual los ciudadanos y todos los Poderes Públicos están sometidos a las leyes y al Derecho, **honradez**, entendido como la rectitud de ánimo y la integridad en el obrar y **lealtad**, como la firmeza en los afectos y en las ideas que lleva a no engañar ni traicionar a los demás; ya que abusando de la buena fe del Instituto de Salud del Estado de México, se ostenta con una profesión de Enfermera General Obstetra sin que la documentación que exhibió y fue agregada a su expediente personal tenga sustento académico alguno; tal como se ha demostrado con las documentales que se encuentra integrada a la instrumental de actuaciones, que conforma el expediente del procedimiento administrativo CI/ISEM/OF/020/2017.



Esto implica que de su estudio no se aprecian medios de convicción para desvirtuar la responsabilidad administrativa atribuida a la servidor público implicada, ya que de las constancias que integran el presente expediente que se resuelve, así como de las presunciones resultantes, se desprenden probanzas que permiten a este Órgano de Control Interno emitir un juicio debidamente fundado y motivado, señalando los preceptos legales aplicables al caso, y las razones que se tuvieron en consideración para arribar a la conclusión de que la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña**, es administrativamente responsable de la irregularidad que se le atribuye en su calidad de servidor público adscrita al Instituto de Salud del Estado de México.

El razonamiento antes expuesto encuentra apoyo en la tesis aislada número XX.305K, visible en la página 291, tomo XV - Enero, Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra señala:

"PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA NO TIENE VIDA PROPIA. LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la Presuncional Legal y Humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tiene vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, está se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos." (sic)

En la etapa de alegatos, la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña**, reiteró su negativa de haber exhibido las documentales que se le atribuyen, así como la supuesta falta de obligación, sin embargo, dichos argumentos son insuficientes para desestimar su responsabilidad administrativa, al no encontrarse robustecidos con algún elemento probatorio que por sí o adminiculado con algún otro, sean suficientes para crear en el ánimo de esta autoridad administrativa dicha convicción; aunado a no combatir de manera directa la irregularidad que le fue atribuida, en consecuencia resulta inoperante su solicitud de emitir en su favor resolución en la que se declare la inexistencia de responsabilidad, toda vez que la misma ha quedado plenamente acreditada en el presente instrumento jurídico.

En ese orden de ideas, se demuestra que la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña** en su calidad de servidor público adscrita al Instituto de Salud del Estado de México, incumplió los principios que como servidor público tiene que observar, en específico los contenidos en el artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que a la letra dice:

*Artículo 42. Para salvaguardar la **legalidad, honradez, lealtad**, imparcialidad y eficacia que deban ser observadas en la prestación del servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público sin perjuicio de sus derechos y deberes laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general..."*

Supuesto que se actualiza en razón de que la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña**, no cumplió con los principios de **legalidad, honradez y lealtad** que rige el servicio público, entendiéndose por **legalidad**, el principio jurídico en virtud del cual los ciudadanos y todos los Poderes Públicos están sometidos a las leyes y al Derecho, **honradez**, entendido como la rectitud de ánimo y la integridad en el obrar y **lealtad**, como la firmeza en los afectos y en las ideas que lleva a no engañar ni traicionar a los demás, ya que abusando de la buena fe del Instituto de Salud del Estado de México, exhibió título y cédula profesional con folio [REDACTED] que la ostentan como Enfermera General Obstetra, supuestamente expedidos por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Dirección General de Profesiones respectivamente, con el propósito de que se agregaran a su expediente personal, sin embargo, de las constancias que obran en autos se advierte que en la base de datos de la Universidad Nacional Autónoma de México, no existe registro alguno del Título supuestamente obtenido por la servidor público implicada, y de la consulta realizada al Registro Nacional de Profesionistas se observa que la Cédula



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Expediente: CI/ISEM/OF/020/2017.

profesional [REDACTED] corresponde a persona distinta a la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña**.

Concluyentemente, se acredita la irregularidad administrativa atribuida a la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña** con base en los documentos agregados en su expediente personal consistentes en el Título y cédula profesional con folio [REDACTED] supuestamente expedidos por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Dirección General de Profesiones, respectivamente, documentos que fueron exhibidos con el firme propósito de que se agregaran a su expediente personal, sin embargo, en la base de datos de la Universidad Nacional Autónoma de México, no existe registro alguno de título obtenido por la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña**, y de la consulta realizada al Registro Nacional de Profesionistas se observa que la cédula profesional [REDACTED] corresponde a persona distinta al implicado; es decir a la [REDACTED] tal como se acredita con los oficios DGAE/DCyCD/1159/2017 visible a foja 60 de los autos, suscrito por el Director General de Administración Escolar de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que informó: "...En atención a su oficio No. 217B11000/02119/2017... mediante el cual solicita la validación de dos títulos de Enfermera General Obstetra emitidos supuestamente por la UNAM a las CC. **OFELIA MARGARITA HERNÁNDEZ PEÑA**... realizada una búsqueda en el Archivo General y en el Sistema Integral de Administración Escolar **no se localizaron antecedentes de las referidas personas como alumnas de esta Universidad** o de alguna Institución incorporada a ésta ..."; y DGP/DJ/1690/2017, visible a foja 58 de los autos, suscrito por la Directora de Autorización y Registro Profesional de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en la que señaló: "...En atención a su oficio número 217B11203/353/2017... mediante el cual solicita se informe si esta Dirección de Profesiones cuenta con registro a favor de los C.C... **OFELIA MARGARITA HERNÁNDEZ PEÑA**, bajo el número de cédula profesional [REDACTED] misma que supuestamente le acredita para ejercer como Enfermera General Obstetra... después de haber realizado una búsqueda en los archivos de esta Unidad Administrativa, **NO SE LOCALIZÓ registro profesional a favor de los C.C... OFELIA MARGARITA HERNÁNDEZ PEÑA**, bajo el número de cédula profesional [REDACTED] misma que supuestamente le acredita para ejercer como Enfermera General Obstetra. Asimismo se comenta que los números de cédula profesional... [REDACTED] corresponden a otras personas... (...) las copias imples que anexa de las cédula profesional números... [REDACTED] mismas que acreditan para ejercer como Enfermera General Obstetra, a favor de los C.C... **OFELIA MARGARITA HERNÁNDEZ PEÑA**, supuestamente expedidas por esta Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, la misma **se desconoce** y por lo tanto, se presume **apócrifa**...", e impresión del resultado obtenido de la consulta realizada por el personal adscrito a este Órgano de Control Interno en el vínculo de la página electrónica (<https://www.gob.mx/>)>Inicio (<http://www.gob.mx/sep>) > Cédula Profesional de la página electrónica del Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, visible a fojas 10 y 11 de los autos, del que se advierte: "...DATOS DE CONSULTA Nombre(s)*: **OFELIA MARGARITA** Primer apellido*: **HERNÁNDEZ** Segundo apellido **PEÑA**...", y "...RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA Cédula [REDACTED] Nombre [REDACTED] Primer Apellido **HERNÁNDEZ** Segundo apellido **PEÑA**... Cédula [REDACTED] Nombre [REDACTED] Primer Apellido **HERNÁNDEZ** Segundo apellido **PEÑA**... Cédula [REDACTED] Nombre [REDACTED] Primer Apellido **HERNÁNDEZ** Segundo apellido **PEÑA**... Cédula [REDACTED] Nombre [REDACTED] Primer Apellido **HERNÁNDEZ** Segundo apellido **PEÑA**...", mientras que a foja 7, se observa: 12 de los autos, del que se advierte: "**DETALLE DEL REGISTRO** *Número de Cédula [REDACTED] Nombre [REDACTED] Profesión: [REDACTED] Año de expedición: **1992** Institución: **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS**..."; de lo anterior, se desprende que la servidor público implicada no actuó con rectitud, legalidad, honradez y lealtad al exhibir diversos documentos que la ostentan con una profesión de Enfermera General Obstetra con el que no cuenta, esto es, debido a que dentro de su expediente personal que obra en la Subdirección de Recursos Humanos del Instituto de Salud del Estado de México, exhibió y se agregaron a dicho expediente personal copia de Título y Cédula Profesional con folio [REDACTED] que la acreditan como Enfermera General Obstetra, siendo esta la irregularidad que se le atribuye a la ahora implicada como servidor público, y aun cuando con dicha exhibición no obtuvo un lucro indebido o se causara daño al patrimonio del Instituto de Salud, o que, dichos documentos no fueron motivo de escalafón o requisito indispensable para ingresar al Instituto de Salud del Estado de México; también es que abusando de la buena fe del Instituto de Salud del Estado de México, también es que se ostenta con una profesión de Enfermera General Obstetra sin que la documentación exhibida por la implicada tenga sustento académico.



Cabe referir que la facultad disciplinaria encuentra su fundamento en el servicio público que el Estado debe prestar a la comunidad con excelencia, a fin de asegurar y controlar la calidad y continuidad de su actividad, que se instrumenta a través de las funciones, empleos, cargos y comisiones de los servidores públicos y que deben satisfacer los valores y cualidades de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia de la gestión y acción administrativa que trasciendan a la calidad y peculiaridades del servicio público para obtener los fines de la planeación y satisfacer las necesidades públicas con la mayor economía y calidad, de suerte que la administración tiene la facultad y la obligación de auto organizarse para cumplir sus objetivos y, en ese contexto, se inscribe el poder disciplinario como actividad de control.

Concluyentemente, se acredita la irregularidad administrativa atribuida a la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña**, con todos y cada uno de los elementos probatorios que obran en autos, elementos probatorios anteriores, que relacionados con los argumentos de la implicada y la instrumental de actuaciones que integra el expediente que se resuelve, al ser analizados y valorados con estricto apego a derecho, se determina que la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña** es administrativamente responsable de la irregularidad atribuida en el procedimiento administrativo que se resuelve, toda vez que incumplió los principios que como servidor público tiene que observar, en específico los contenidos en el artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que a la letra dice:

*"... Artículo 42. Para salvaguardar la **legalidad, honradez, lealtad**, imparcialidad y eficacia que deban ser observadas en la prestación del servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público sin perjuicio de sus derechos y deberes laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general...*

Supuesto que se actualiza en razón de que la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña**, no cumplió con los principios de **legalidad, honradez y lealtad** que rige el servicio público, entendiéndose como tales, el modo de comportarse del que cumple con su deber respetando la ley, sin beneficiarse ni beneficiar a otros irregularmente; así como la rectitud de ánimo en el obrar, y por lealtad la firmeza en los afectos y en las ideas que lleva a no engañar ni traicionar a los demás, toda vez que exhibió copia de título y cédula profesional con folio [REDACTED] que la ostentan como Enfermera General Obstetra, supuestamente expedidos por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Dirección General de Profesiones respectivamente, con el propósito de que se agregaran a su expediente personal, sin embargo, de las constancias que obran en autos se advierte que la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña**, únicamente cuenta con carta de pasante en la carrera de Enfermería General, por lo que de ninguna manera se le pudo expedir en su favor el título de Enfermera General Obstetra, y de la consulta realizada al Registro Nacional de Profesionistas se observa que la Cédula profesional [REDACTED] corresponde a persona distinta a la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña**.

Concluyentemente, se acredita la irregularidad administrativa atribuida a la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña** con base en los documentos agregados en su expediente personal consistentes título y cédula profesional con folio [REDACTED] supuestamente expedidos por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Dirección General de Profesiones, respectivamente, documentos que fueron exhibidos con el firme propósito de que los mismos fueran agregados a su expediente personal, sin embargo, en la base de datos de la Universidad Nacional Autónoma de México, no existe registro alguno de título obtenido por la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña**, y de la consulta realizada al Registro Nacional de Profesionistas se observa que la cédula profesional con folio [REDACTED] corresponde a persona distinta a la implicada; de lo anterior, se desprende que la servidor público implicada no actuó con rectitud, honradez, legalidad y lealtad al ostentarse con una profesión de Enfermera General Obstetra con la que no cuenta durante la prestación del servicio público, esto es, debido a que dentro de su expediente personal que obra en la Subdirección de Recursos Humanos del Instituto de Salud, se encuentran glosadas copia del título y cédula profesional con folio [REDACTED] que la acreditan como Enfermera General Obstetra, por lo que aun



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Expediente: **CI/ISEM/OF/020/2017.**

cuando con dicha exhibición no obtuvo un lucro indebido o se causara daño al patrimonio del Instituto de Salud, o que, dichos documentos no fueron motivo de escalafón o requisito indispensable para desempeñarse como Técnico en Atención Primaria a la Salud, ello no es suficiente para eximirla de responsabilidad administrativa.

Por lo anterior y atendiendo a lo vertido en el cuerpo de la presente resolución, se determina que la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña** es administrativamente responsable de la irregularidad atribuida en el procedimiento administrativo que se resuelve, por lo que se procede al análisis de los elementos de juicio previstos en el artículo 137 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y 49 párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, mismos que a continuación se motivan:

- a) Por lo que hace a la **gravedad de la infracción en que se incurra** dispuesta en la fracción I del artículo 137 del citado Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, e inciso a) del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, esta Contraloría Interna determina que la conducta en que incurrió la servidor público se considera de alta gravedad, ya que no se apegó a los principios de legalidad, honradez y lealtad que deben ser observados en el servicio público establecidos el artículo 42 de la Ley de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que señala: "**Artículo 42. Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que deban ser observadas en la prestación del servicio público,, independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público sin perjuicio de sus derechos y deberes laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general...**", esto, debido a que en su calidad de servidor público adscrita al Instituto de Salud del Estado de México, exhibió copia del título y cédula profesional con folio [REDACTED] que la ostentan como Enfermera General Obstetra, supuestamente expedidos a su favor, por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, respectivamente, con el propósito de que se agregaran a su expediente personal; sin embargo, de las constancias que obran en autos se advierte que en la base de datos de la Universidad Nacional Autónoma de México, no existe registro de que la implicada fue alumna de dicha institución o de alguna otra incorporada a la citada Universidad, consecuentemente, no existe registro del título supuestamente obtenido por la servidor público implicada, y de la consulta realizada al Registro Nacional de Profesionistas se observa que la cédula profesional con folio [REDACTED] corresponde a persona distinta a la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña**, por lo que se colige que dichos documentos son apócrifos, bajo esa tesitura, la conducta de la servidor público atentó contra los principios de legalidad, honradez y lealtad consagrados en el artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; ya que abusando de la buena fe con que se conduce el Instituto de Salud del Estado de México, entendiéndose por tal la probidad, empleando la denominación "probidad" como condición de bondad, rectitud o transparencia en el proceder de los empleados públicos, no obstante, exhibió documentos que la acreditan con una profesión de Enfermera General Obstetra con la que no cuenta, faltando con ello al principio de legalidad, entendiéndose por tal, la conducta que se efectúa respetando la ley, conduciéndose deshonestamente para con el Instituto de Salud, quien accedió a ingresar dichos documentos al expediente personal de la servidor público por considerarlos veraces; sin embargo, derivado de la indagatoria que llevó a cabo esta Unidad de Contraloría Interna se desprende que en la base de datos de la Universidad Nacional Autónoma de México, no existe registro alguno del título supuestamente obtenido por la servidor público implicada, y de la consulta realizada al Registro Nacional de Profesionistas se observa que la Cédula profesional con folio [REDACTED] corresponde a persona distinta a la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña**, por lo que al haber actuado de forma incorrecta e irregular, su actuar se considera de gravedad.

Sustentan lo expuesto la tesis aislada número I.5o.C.48 C, visible en la página 1696, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, de los Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra señala:

“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante”.

Expediente: CI/ISEM/OF/020/2017.

PRINCIPIO DE BUENA FE CONTRACTUAL. APARTARSE DE LA CONDUCTA DEBIDA SE TRADUCE EN UN HECHO ILÍCITO. Los sujetos de derecho, por cuanto que exteriorizan su voluntad contractual y ésta constituye la norma individual a la que se sujetan, se constituyen a la vez en los propios Jueces de su conveniencia; el juzgador formal, en tanto es parte de la estructura judicial del Estado, lo será en caso del abuso, de la lesión, o de la mala fe de los intervinientes, no de la apariencia contractual que pudiera nunca descubrirse. Conforme a ello, el apartarse de la buena fe, comporta una conducta ilícita, sancionable por el derecho, en los términos previstos en el artículo 1910 del Código Civil Federal. Así se considera, porque la protección de la confianza suscitada y la seguridad misma de los actos jurídicos, exigen que quien contribuye con su actuación a crear una determinada situación de hecho cuya apariencia resulta verosímil conforme a la normatividad legal y contractual aplicables, debe asumir las consecuencias que de ello deriven; de manera que no resulte lícito apartarse ni querer evadirse de ellas.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 740/2010. Spectrasite Communications, Inc. 15 de diciembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca.

Así como la tesis aislada número I.5o.C.51 C, visible en la página 1698, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, de los Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra señala:

PRINCIPIO DE BUENA FE CONTRACTUAL. IMPLICA UNA CONDUCTA DE COOPERACIÓN Y DE GENERACIÓN DE CONFIANZA ENTRE LOS CONTRATANTES. La buena fe exige en los sujetos una positiva actitud de cooperación y generación de confianza en las propias manifestaciones de voluntad, aun las emitidas a través de un sujeto diverso, que si bien tiene personalidad propia conforme a la regulación legal, ha cedido su aptitud para obligarse y decidir motu proprio, a quien por ser su creador ejerce un control sobre su persona; manteniéndose de ese modo la palabra empeñada, y trascendiendo dicho principio como un límite para el ejercicio de los derechos subjetivos involucrados. Así se estima porque todo derecho que la norma confiere a sus destinatarios, debe ejercitarse con moderación y prudencia, sobre todo cuando choca con intereses contrarios; de modo que la buena fe sólo opera en las relaciones intersubjetivas, en tanto pueda asumirse que uno de los sujetos no puede esperar del otro una conducta perjudicial a los intereses manifestados y concretados conforme a la propia ley, es decir, debe actuarse con una lealtad contractual.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 740/2010. Spectrasite Communications, Inc. 15 de diciembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca.

Por lo que al haber abusado de la confianza del Instituto de Salud del Estado de México, faltó al principio de lealtad, entendido como la firmeza en los afectos y en las ideas que lleva a no engañar ni traicionar a los demás, consecuentemente, la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña**, debe ser sancionada bajo los considerandos expuestos en el cuerpo del presente resolutivo.

Cabe precisar que la conducta de la servidor público implicada se traducen en condicionantes reveladoras de la trascendencia social que puede ocasionarse con el acto de usar documentos apócrifo, lo que es razonable en razón a que la existencia per se, sobre todo tratándose de documentos públicos, necesariamente conduce a establecer una afectación real o potencial al bien jurídico tutelado, no sólo cuando con esa elaboración o acto material de alteración o falsificación, concurren, además, el propósito de sacar algún provecho para sí o para otro o causar un perjuicio en contra de terceros y que la falsificación sea sin el consentimiento del tercero potencialmente afectado, que es la certeza y veracidad que corresponde a la expedición de documentos, de modo que, resulta obvio que todo aquel que use un documento a sabiendas de su falsedad o apocrificidad, denota la intención de obtener algún tipo de beneficio y la potencial transgresión,

“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante”.

Expediente: CI/ISEM/OF/020/2017.

por razón del estado de peligro que produce, al bien jurídico, ello en función de su naturaleza que presupone el uso consciente de un documento apócrifo, de manera que se presumen las peculiaridades de dicha falsificación.

- b) Respecto a **los antecedentes de la infractora**, establecidos en la **fracción II** del artículo 137 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en relación con el **inciso b)** correspondiente a **nivel jerárquico, antigüedad y las condiciones de la infractora en el servicio público** del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de referencia, debe decirse que de las constancias del expediente que se resuelve se advierte que la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña** tiene una antigüedad en el Instituto de Salud del Estado de México de treinta y seis años nueve meses, al haber ingresado al Instituto de Salud del Estado de México el dieciséis de octubre de mil novecientos ochenta, tal como se desprende del oficio 217B32100/07506/2017, suscrito por el Subdirector de Recursos Humanos del Instituto de Salud del Estado de México, visible a foja 14 y 15 de los autos; de lo que se concluye que desde que la servidor público exhibió en el Instituto de Salud la copia del título y cédula profesional con folio [REDACTED], la implicada hacía uso de documentos presuntamente apócrifos que la ostentaban con una profesión de Enfermera General Obstetra que no tiene, incumpliendo los principios que deben observarse en el servicio público y que se encuentran establecidos en el artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, al haber exhibido copia del título y cédula profesional con folio [REDACTED], que la ostentan como Enfermera General Obstetra, supuestamente expedidos a su favor por la Universidad Nacional Autónoma México y la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, respectivamente, con el propósito de que se agregaran a su expediente personal, a sabiendas de que dichos documentos no fueron expedidos a favor de la implicada; por tanto, ello culminó en responsabilidad administrativa para la citada servidor público, lo que se constituye como una agravante para determinar la sanción impuesta a la servidor público con motivo de cargo, ya que debió abstenerse de exhibir dichos documentos al Instituto de Salud del Estado de México, contrario a ello, abusando de la buena fe con la que se conduce el Instituto para el cual presta sus servicios, la citada implicada exhibió documentos que no cuentan con sustento académico.
- c) Por cuanto hace a **las condiciones socioeconómicas de la infractora** que alude la **fracción III** del referido artículo 137 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en relación con el **inciso c)** del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, debe decirse que de las constancias que obran en autos se advierte que la servidor público cuenta con un sueldo mensual de \$14,783 (catorce mil setecientos ochenta y tres pesos moneda nacional) aproximados, situándose en un estado socio-económico que le permite satisfacer sus necesidades básicas, lo cual la ubica en un [REDACTED] unido a ello, debe considerarse que al percibir un sueldo por parte del Instituto de Salud del Estado de México, debió y debe cumplir con los principios, obligaciones y deberes que emanan del servicio público y suprimir la práctica de acciones u omisiones que contravinieran y contravengan el servicio público y quebranten las disposiciones jurídicas que se relacionan con el servicio público, lo cual es evidente que no realizó, lo que constituye un agravante para determinar la sanción impuesta a la servidor público, en razón que con motivo de la percepción de sueldo por parte del Instituto de Salud del Estado de México, debe cumplir con los principios inherentes al servicio público encomendado.
- d) Respecto a **la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones**, circunstancia dispuesta en la **fracción IV** del multicitado artículo 137 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en relación con el **inciso d)** correspondiente a **antecedentes de imposición de sanciones y posible reincidencia del servidor público en el incumplimiento de obligaciones de la misma naturaleza**, del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, el antecedente de imposición de sanciones no se actualiza en razón de que en el Sistema Integral de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, que se lleva en esta Contraloría Interna, no existe registro de sanción



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Expediente: CI/ISEM/OF/020/2017.

administrativas alguna impuesta por este Órgano de Control Interno en contra de la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña**, sin embargo, en el desarrollo del presente resolutivo, se acredita la infracción de la implicada en el servicio público adscrita al Instituto de Salud del Estado de México; por ende, y con la finalidad de evitar posteriores faltas de la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña**, es que esta autoridad administrativa determina la imposición de la sanción correspondiente, en razón de que la conducta de la servidor público implicada puede tener trascendencia en la prestación del servicio público con la población usuaria, ante el uso de documentos presuntamente apócrifo y además necesariamente conduce a establecer una afectación real o potencial al bien jurídico tutelado, no sólo porque cuando con esa elaboración o acto material de alteración, falsificación o uso de documento apócrifo, concurren además, el propósito de sacar algún provecho para sí o para otro o causar un perjuicio en contra de terceros y que la falsificación sea sin el consentimiento del tercero potencialmente afectado, que es la certeza y veracidad que corresponde a la expedición de documentos, de modo que, resulta obvio que todo aquel que use un documento a sabiendas de su falsedad o apocricidad, denota la intención de obtener algún tipo de beneficio y la potencial transgresión, por razón del estado de peligro que produce, al bien jurídico tutelado, ello en función de su naturaleza que presupone el uso consciente de un documento apócrifo, de manera que se presumen las peculiaridades de una falsificación.

- e) Finalmente, por lo que hace a la circunstancia correspondiente a el monto del beneficio, daño o perjuicio económico, derivado del incumplimiento de obligaciones que establece la **fracción V** del artículo 137 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en relación con el **inciso e)** del artículo 49 de la citada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en el caso que nos ocupa no existe; sin embargo, ello no implica la desacreditación de la responsabilidad administrativa en que incurrió la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña**, en consecuencia, la imposición de la sanción correspondiente.

Por lo anterior y con base en los razonamientos vertidos en el presente considerando, se determina que la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña**, es administrativamente responsable de la irregularidad atribuida en el oficio citatorio 217B11000/05420/2017.

Concluyentemente esta autoridad administrativa, con fundamento en los artículos 43 y 49 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, determina procedente aplicar la destitución del empleo, cargo o comisión que actualmente desempeña en el Instituto de Salud del Estado de México; asimismo, al haberse acreditado la infracción a los principios de legalidad, honradez y lealtad que rigen el servicio público, por parte de la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña**, se determina procedente aplicar además la sanción de inhabilitación como medida idónea de erradicación de la conducta sancionada, por lo que en términos de los artículos 43 y 49 fracción V de la invocada Ley de Responsabilidades, que estipula que dicha sanción deberá oscilar entre un periodo no menor de seis meses como mínimo ni mayor a ocho años como máximo, siendo el término medio aritmético el correspondiente a cuatro años tres meses, considerando las circunstancias generales y particulares expuestas en el presente instrumento jurídico, por lo que la sanción deberá situarse entre la mínima y media aritmética; en consecuencia, esta autoridad administrativa considera procedente aplicar la **inhabilitación por el término de tres años** para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, lo anterior, pues no puede estimarse la aplicación del periodo mínimo atendiendo a la trascendencia y dolo con que se condujo la implicada, sin embargo tampoco se considera la media aritmética al estimarse excesiva.

En este tenor, se determina procedente imponer como sanción administrativa disciplinaria a la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña**, la consistente en [REDACTED]

[REDACTED] así como la **inhabilitación por el término** [REDACTED]



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Expediente: **CI/ISEM/OF/020/2017**.

de tres años para el desempeño de empleo, cargo o comisión en el servicio público, derivado de la responsabilidad administrativa en que incurrió y que quedó precisada en la presente resolución.

Por lo anteriormente expuesto, analizado, motivado y fundado, es de resolverse y se:

RESUELVE

PRIMERO. En razón de lo expuesto en los considerandos IV y V, se determina que las **CC. Juana Lourdes Barrera Morales y Ofelia Margarita Hernández Peña**, servidoras públicas adscritas al Instituto de Salud del Estado de México, son administrativamente responsables de la irregularidad que se les atribuyó.

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 43, 49 fracción III y V y 52 párrafo primero de la Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, esta autoridad administrativa determina procedente imponer como sanción administrativa a las **CC. Juana Lourdes Barrera Morales** [REDACTED] **inhabilitación** por el **término de tres años**, derivado de la responsabilidad administrativa en que incurrió en su calidad de servidora pública adscrita al del Instituto de Salud del Estado de México.

TERCERO. Con fundamento en los artículos 43, 49 fracción III y V y 52 párrafo primero de la Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, esta autoridad administrativa determina procedente imponer como sanción administrativa a la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña** [REDACTED] **inhabilitación** por el **término de tres años**, derivado de la responsabilidad administrativa en que incurrió en su calidad de servidora pública adscrita al del Instituto de Salud del Estado de México.

CUARTO. En cumplimiento por lo dispuesto en los artículos 65 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, 1.8 fracción XII del Código Administrativo del Estado de México y 139 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se hace del conocimiento de las **CC. Juana Lourdes Barrera Morales y Ofelia Margarita Hernández Peña**, que tienen derecho a promover recurso de inconformidad ante esta Contraloría Interna, o Juicio Administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en contra de la presente resolución, dentro del término de quince días hábiles siguientes al en que surta sus efectos la respectiva notificación.

QUINTO. Notifíquese personalmente la presente resolución a las **CC. Juana Lourdes Barrera Morales y Ofelia Margarita Hernández Peña**, en el domicilio que para tal efecto tienen señalado en autos.



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Expediente: CI/ISEM/OF/020/2017.

SEXTO. Inscribase la sanción impuesta a los **CC. Juana Lourdes Barrera Morales y Ofelia Margarita Hernández Peña**, en el Registro correspondiente que se lleva en la Dirección General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México en términos del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; así mismo, notifíquese a la Directora General del Instituto de Salud del Estado de México, para los efectos de la ejecución de la sanción.

SÉPTIMO. Toda vez que la el domicilio señalado por la **C. Ofelia Margarita Hernández Peña** para oír y recibir notificaciones no existe, según se desprende de la razón de notificación glosada a foja 93 de los autos, con la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la servidor público, se ordena su notificación en su domicilio laboral, y en los estrados de esta Contraloría Interna, lo anterior, de conformidad con los artículos 25 fracción III y 26 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

OCTAVO. En su oportunidad, remítase al archivo el expediente en que se actúa como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvió y firma, el **licenciado Rafael León Barrios**, Contralor Interno del Instituto de Salud del Estado de México.

JGCG/LAJV/LFI/KJV

